

**EFFECTOS ECONÓMICOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN
COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 – 2013**

OLGA LUCÍA CASTELLANOS MONTT

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
BUCARAMANGA**

2016

**EFFECTOS ECONÓMICOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN
COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 – 2013**

OLGA LUCÍA CASTELLANOS MONTT

**Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el título de
Economista**

DIRECTOR

Ph.D. JOSÉ ALBERTO PINTO MANTILLA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
BUCARAMANGA**

2016

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	7
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	8
1.3 OBJETIVOS.....	10
1.3.1 Objetivo General.....	10
1.3.2 Objetivos Específicos.....	10
1.4 METODOLOGÍA	11
2. MARCO TEÓRICO	12
3. ORIGEN DEL CONFLICTO COLOMBIANO.....	15
4. CAUSAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO	19
4.1 CAUSAS ECONÓMICAS.....	20
4.2 CAUSAS POLÍTICAS	23
4.3 CAUSAS SOCIALES	24
5. TRAYECTORIA DEL CONFLICTO ARMADO	27
5.1 PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO	33
6. LA ECONOMÍA DEL CONFLICTO	39
6.1 COSTOS DIRECTOS DEL CONFLICTO.....	40
6.1.1 Daños a la infraestructura.....	41
6.1.2 Secuestro y extorsión	45
6.1.3 El gasto en defensa y seguridad.....	48

6.2 COSTOS INDIRECTOS DEL CONFLICTO	52
6.2.1 Detrimento a la productividad	52
6.2.2 Concentración de la propiedad rural.	53
6.2.3 Ley de víctimas.	53
6.2.4 Efectos sobre la inversión	56
6.2.5 Incremento de la pobreza	60
7. CONCLUSIONES	64
BIBLIOGRAFÍA.....	66

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Análisis del Incremento en el Gasto en Defensa y Seguridad: Resultados y Sostenibilidad de la Estrategia	51
Tabla 2. Gasto en víctimas en el presupuesto General de la Nación, 2000-2012	54
Tabla 3. Distribución del gasto en el presupuesto General de la nación (miles de millones y participación % presupuesto definitivo)	55

LISTA DE GRAFICOS

	Pág.
Grafica 1. Actividades armadas de los principales actores del conflicto armado 1958-208.....	36
Grafica 2. Numero de voladuras de oleoductos 1990 -2006	42
Grafica 3. Numero de voladuras a Torres de energía (*) 1990-2006.....	44
Grafica 4. Víctimas de secuestro 1990 – 2013	46
Grafica 5. IED en Colombia Vs en el exterior	59
Grafica 6. Índice PIB total – PIB Agrícola	60

RESUMEN

TITULO: EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990-2013.

AUTOR: OLGA LUCÍA CASTELLANOS MONTT Y EDWIN ANÍBAL TARAZONA JAIMES.

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO INTERNO, VIOLENCIA, CRECIMIENTO ECONÓMICO, PIB

Esta investigación tiene como objetivo determinar los efectos del conflicto armado colombiano en el crecimiento económico para el período 1990-2013 distinguiendo el impacto de cada uno de los grupos y diferenciando la violencia generada desde el conflicto de la violencia criminal.

El estudio se realiza para el periodo 1990-2013, debido al fortalecimiento que los grupos armados experimentaron en los años 90, lo que incidió en el incremento del gasto en defensa y seguridad, posicionando a Colombia como el país con el mayor gasto militar como porcentaje del PIB de la región.

El conflicto no solo afecta la dinámica de la economía de forma directa, es decir, a través del impacto en la productividad; sino también indirectamente, mediante los efectos que genera la inseguridad de la situación.

El final del conflicto, sin duda sería dirigiría la economía hacia la senda de un crecimiento sostenido, si se implementan las políticas públicas y medidas económicas adecuadas.

Si bien la posible pacificación del conflicto liberaría esa parte del Presupuesto General de la Nación, en el corto plazo estos dividendos con los que se ha mantenido la guerra, tendrán que ser destinados para los costos que la paz va a generar. Esto no quiere decir que la paz tenga un valor monetario, lo que tiene un costo y bastante alto es el proceso para alcanzarla.

Entre 2000 y 2014, han sido destinados \$4.13 billones para resarcir económicamente a las víctimas del conflicto, los diálogos en La Habana han generado un costo cercano a los \$15 mil millones hasta 2013, mientras que la protección de más de 2 millones de menores entre desplazados y rescatados de las filas subversivas lleva sumados \$139.268 millones.

*Trabajo de grado

** Facultad De Ciencias Humanas. Escuela De Economía. Director Del Proyecto. Ph.D. José Alberto Pinto Mantilla

ABSTRACT

TITLE: ECONOMIC EFFECTS OF INTERNAL ARMED CONFLICT IN COLOMBIA FOR THE PERIOD 1990-2013.

AUTHOR: OLGA LUCIA Montt CASTELLANOS AND EDWIN ANÍBAL TARAZONA JAIMES.

KEYWORDS: INTERNAL ARMED CONFLICT, ECONOMIC GROWTH. VIOLENCE, GDP.

This research aims to determine the effects of violence associated with Colombian Armed Conflict on economic growth in the period 1990-2013, distinguishing the impact of conflicting groups and differentiating the violence of the conflict of criminal violence.

This study was conducted for the period 1990-2013, due to the strengthening of armed groups experienced in the 90s , which influenced the increase in spending on defense and security , positioning Colombia as the country with the largest military spending as a percentage GDP in the region.

The conflict not only affects the dynamics of the economy directly, that is, through the impact on productivity; but also indirectly through the effects generated by the uncertainty of the situation.

The end of the conflict would undoubtedly be leading the economy towards sustained growth, if the public policies and adequate economic measures are implemented.

While the possible pacification of the conflict would liberate that part of the General Budget of the Nation, in the short term these dividends with which the war has been maintained, will have to be destined for the costs that the peace will generate. This does not mean that peace has a monetary value, which has a cost and quite high is the process to achieve it.

Between 2000 and 2014, \$ 4.13 billion has been allocated to financially compensate the victims of the conflict, the dialogues in Havana have generated a cost close to \$ 15 billion until 2013, while the protection of more than 2 million children among the displaced And rescued from the subversive ranks has totaled \$ 139.268 million.

* Degree work

** Faculty of Human Sciences. School of Economy. Director of The Project. Ph.D. José Alberto Pinto Mantilla

INTRODUCCIÓN

Al definir el conflicto como una manifestación de las comunidades humanas, ha de entenderse este como la expresión de la diversidad y la complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas y problemas de los grupos que la conforman¹. El conflicto armado interno es una colisión de intereses que influye sobre la economía de cualquier país, ya sea de forma transitoria o constante al afectar a una o más variables económicas².

El conflicto colombiano es de baja escala, (entre 1000 y 10000 víctimas anuales)³, variado en sus pautas de victimización y protagonistas del evento. La magnitud de la violencia criminal expone que el conflicto colombiano está incluido entre los más sangrientos en la contemporaneidad latinoamericana, y, la dimensión de este flagelo que ha sido investigada por el GMH⁴, revela que fue el causante de 220.000 muertes desde 1958 hasta diciembre de 2012.

La teoría económica propone que la presencia de accionares bélicos en una nación genera desconfianza en los inversionistas, desincentiva la propensión al ahorro, incrementa las pérdidas tanto en capital físico como humano; además de desviar del Gasto Público los fondos destinados a inversión social. Pese a que el conflicto colombiano posee características que lo ubican entre los cinco más prolongados e intensos del mundo y el último del continente americano⁵, el país ha mantenido un crecimiento promedio superior al de países de la región sin presencia de conflicto, pero inferior al promedio propio en el largo plazo.

¹ Vargas Velásquez, Alejo. Una mirada académica a los conflictos colombianos, Ministerio de Justicia, PNR, Bogotá, 1994.

²Echeverry Juan, Salazar Natalia, Navas Verónica. El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. Economía. Crimen y Conflicto, Martínez, A Editora. Universidad Nacional Bogotá 2001

³ Pizarro, Eduardo. Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Editorial Norma 2004.

⁴ Grupo de Memoria Histórica

⁵ Kalmanovitz, Salomón. El impacto económico del conflicto interno colombiano y un escenario de paz.

La finalización del conflicto y la consecución de la paz, son factores indispensables que permitirían ubicar el espacio económico, social y político idóneo para arremeter contra los problemas estructurales de la economía en una zona de conflicto. La metodología empleada en los análisis para la pacificación de conflictos, está basada en recomendaciones sistemáticas enfocadas hacia el logro de la culminación de estos episodios bélicos, con el fin de frenar el deterioro del tejido humano e impulsar el bienestar social en todos los aspectos. A estos análisis se ha agregado desde hace unas décadas el tema económico, debido a que los costos generados por el conflicto son cuantificables y la pacificación del mismo es más beneficiosa.

Los episodios de criminalidad y violencia en Colombia han sido objeto de estudio durante los últimos años por diferentes ramas de las ciencias sociales. Estos estudios en su mayoría se han orientado de tres formas: 1) para quienes el origen y perennidad del crimen violento forma parte de la historia del país; 2) un reducido número de investigadores que desde los años noventa se han concentrado en puntualizar sobre los efectos que el conflicto armado ejerce sobre la economía nacional, y 3) quienes distinguen entre la violencia generada dentro del conflicto armado y la violencia delincuencial. Estos últimos aclaran que aunque algunas veces la línea que separa estas dos manifestaciones de violencia es tan frágil que las puede hacer ver como una sola; se diferencian en la finalidad con que se lleva a cabo; la primera se efectúa exclusivamente con fines políticos, mientras la segunda tiene fines totalmente lucrativos. En esta investigación se diferenciará la pululación de la violencia criminal presente en Colombia, de la del conflicto armado interno propiamente dicho.

En este trabajo no se abordarán los objetivos de los grupos que tienen mayor relevancia dentro del conflicto (FARC, ELN y paramilitares), sino que se asumirá que la violencia perpetrada por estos grupos, es una violencia que está asociada netamente al conflicto armado, de modo que se determinará el impacto de la violencia generada desde el conflicto sobre el comportamiento de la economía

colombiana entre 1990 y 2013, individualizando el accionar de cada uno de los grupos activos dentro del mismo. Es decir, se tendrán en cuenta las repercusiones económicas provenientes de los accionares de los dos grupos guerrilleros y de los paramilitares por separado.

Esta investigación se está realizando en medio de las negociaciones del Gobierno con las FARC- EP y acercamientos con el UC-ELN por tanto, los efectos económicos de un posible postconflicto solo serán esbozados en caso tal, que se dé la culminación del mismo.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el siglo XIX, en Colombia se suscitaron numerables confrontaciones civiles violentas, cada una con diferente nivel de intensidad. Adentrándonos en el siglo XX, se evidencian dos distintos episodios ligados entre sí: El primero abarca dos periodos, desde 1899 hasta 1903, conocido como la Guerra de los Mil Días, y la Violencia (1948 – 1962), ambos de corte bipartidista. El segundo episodio, vigente desde los años 50 está asociado a movimientos insurgentes y grupos al margen de la ley⁶.

Este estudio se realiza para el periodo 1990-2013, debido al auge del narcotráfico y el fortalecimiento que los grupos armados experimentaron en los años 90, como consecuencia de la tregua pactada entre los grupos FARC y M-19 con el presidente Betancur en 1984. El incumplimiento de esta tregua por parte de las FARC, motivó el accionar de las milicias al servicio del narcotráfico, dándoles a los ejércitos privados al servicio de las mafias el pretexto ideal para alegar una especie de legitimidad.

Parte de lo pactado en 1984, obligó al Ejército a cesar todos los operativos en contra de los grupos alzados en armas. Fue fácil para la insurgencia y los paramilitares aumentar su pie de fuerza los siguientes años. De tener 8 frentes en 1978 sumaban 65 frentes en 1995. Por su parte el ELN que contaba con tan solo 3 frentes en 1978, en 1995 llegó a 32. En el caso del EPL cuya desmovilización se llevó a cabo en 1990, sumaba solo 5 frentes en 1995⁷, en tanto que los Paramilitares en 1997 conformaron las AUC, un solo ejército de cerca de 16 mil hombres, que operaban bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil.

⁶ Revista Análisis Político No. 76 septiembre-diciembre 2012 Bogotá.

⁷ Echandía, Camilo. Expansión Territorial de la Guerrilla Colombiana: Geografía, Economía y Violencia, en Reconocer la Guerra para Construir la Paz, Seguridad y Justicia en Colombia. Malcolm Deas y María Victoria Llorente, Compiladores. Programa de Estudios sobre Violencia, Seguridad y Justicia de la Universidad de los Andes. Editorial Norma 1999.

Esta ampliación en el pie de fuerza impulsó una significativa expansión de poder territorial, lo que perturbó el funcionamiento económico en una cada vez más extensa región de la geografía nacional. Aumentaron las actividades ilícitas para seguir costeando la participación en el combate. A partir de entonces, y de forma constante, los problemas de seguridad entran a formar parte de las consecuencias económicas del conflicto.

La dispersión del poderío territorial de los grupos armados, amplió también el radio de acción de atentados a las infraestructuras privadas y nacionales, secuestros y extorsión; lo que representa además una contracción de las actividades económicas en las zonas afectadas con disminución de la productividad. Estos hechos generan un incremento en el pie de fuerza por parte de las Fuerzas Militares, que implican un alza considerable del gasto militar; el número de víctimas también se multiplica y por ende los costos sociales.

Esta investigación solo incluye trece años, pero no se puede desconocer que el recorrido histórico de la conflictividad en Colombia, como nación independiente, data desde el año de 1810, con el Grito de Independencia, que generó choques entre Centralistas y Federalistas enfrentados por la forma de cómo debía ser dirigida la nueva nación independiente, lo cual facilitó la reconquista española.

Además de los miles de asaltos a poblaciones y secuestros (civiles, militares, políticos), los cientos de atentados contra bienes civiles y nacionales por parte de las guerrillas; y las cerca de dos mil masacres y asesinatos selectivos perpetrados por la Fuerza Pública, los grupos Paramilitares y de Autodefensas; entre los acontecimientos más relevantes del siglo XX anteriores al conflicto tenemos⁸:

⁸ "Violentología: un manual del conflicto colombiano". Recopilación de fotografías que describen la historia del conflicto armado interno en Colombia. Ferry, Stephen. Reportero gráfico de guerra. Icono Editorial 2012

- 1899 – 1902: La Guerra de los Mil Días, la rebelión liberal una vez más se enfrenta al gobierno conservador, que reprime violentamente a los civiles liberales.
- 6 de diciembre de 1928: Masacre de las bananeras. El mayor crimen contra los trabajadores colombianos. Este hecho fue justificado por el gobierno pero denunciado por el representante liberal a la Cámara, Jorge Eliécer Gaitán, quien mostró en el Congreso las atrocidades cometidas, luego de haber recorrido la región de los hechos, mostrando la responsabilidad tanto del Ejército, como de la multinacional estadounidense United Fruit Company, aún presente en la zona de Urabá bajo el nombre de Chiquita Brands.
- 7, 8 y 9 de junio de 1929: Estudiantes y trabajadores marchan reclamando justicia por la masacre de las bananeras y exigiendo respeto por los derechos humanos. El Batallón Guardia Presidencial responde a esta manifestación, asesinando a un estudiante derecho de la Universidad Nacional. Universitarios y estudiantes de secundaria una vez más se manifiestan contra el terrorismo de la dictadura de Rojas Pinilla el 9 de junio y en respuesta, el Batallón Colombia abre fuego indiscriminadamente asesinando a 13 estudiantes más y dejando heridos a más de 50.
- 9 de abril de 1948: El Bogotazo, asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Se pasa de una lucha bipartidista de derecha a una guerra del Estado contra los movimientos de izquierda, vigente hasta nuestros días.
- 1948 – 1965: La Violencia, abarcó un periodo de confrontación armada que se agudizó con el asesinato de Gaitán y se extendió hasta 1965. Fuerzas de seguridad y paramilitares al servicio de gobiernos conservadores, reprimen a la población liberal y a los movimientos sociales. Mueren cerca de 200.000 colombianos y se forman las guerrillas liberales y comunistas.

Aunque el conflicto en Colombia no tiene características étnicas ni religiosas como los acontecidos en Oriente Medio y África, está catalogado como uno de los más violentos, prolongados y complejos del mundo; sumado a ello están los diferentes intentos de negociación que en busca de una solución para ponerle fin, no han pasado de ser más que propuestas fallidas.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Desde la teoría económica se plantea que el conflicto armado, a través de varios canales obstaculiza el crecimiento económico, destruye capital humano, natural y físico, afecta los flujos de comercio, genera incertidumbre inversionista y desvía gasto del gobierno hacia actividades menos productivas⁹.

Dada la prolongación del conflicto colombiano, es necesario analizar el grado de responsabilidad que este episodio representa para el desarrollo de la economía nacional, ya que comparado con la dinámica económica de países de la región sin presencia de conflicto, no pareciera ser un determinante del crecimiento económico en general.

Lo anterior no niega que el conflicto armado y la violencia generada desde sus acciones, además de formar parte de la actualidad política, económica y sociocultural del país; sea un limitante más para el desarrollo. La corrupción política es uno de los factores que incide en el comportamiento de la economía de cualquier país tenga o no presencia de un conflicto armado interno. En Colombia, el flagelo de la corrupción sumado a lo prolongado del conflicto, son responsables de la pobreza en la que vive el 30.6% de la población¹⁰.

⁹ Díaz, Ana M. y Sánchez, Fabio. "Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano". Sánchez, Fabio. "Las cuentas de la violencia". Bogotá. Universidad de los Andes-Editorial Norma 2008.

¹⁰ Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2013.

La formulación y ejecución de políticas incluyentes y participativas dentro de un escenario de posconflicto, serían la combinación apropiada para una paz sólida y duradera, que pueda encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Los protagonistas armados legales e ilegales, las víctimas, las instituciones y la población en general; deben conjuntamente velar porque se respeten los acuerdos a que se lleguen y trabajar juntos en busca de los objetivos que generen un bienestar favorable para todas las partes y así mismo dirigirla a todos los sectores económicos.

En este trabajo nos ocuparemos de analizar los efectos que genera el conflicto armado a la economía colombiana, teniendo en cuenta que esta confrontación es sólo uno de los diversos factores que influyen de alguna forma en la productividad, sin desconocer que adicional a los costos económicos cuantificables y no cuantificables existen diversos efectos sociales, políticos y culturales que pueden obstaculizar el desarrollo económico.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La motivación de este trabajo nace de la expectativa generada por el desarrollo del proceso de paz en La Habana y los cambios que se originen en torno a él; teniendo en cuenta que la lucha armada en Colombia es la más prolongada del continente y figura entre los cinco conflictos más largos e intensos del siglo XX. Es también el tratar de comprender, como ante esta situación, la posición asumida por algunos gobiernos de turno (1966 – 2010), se caracterizó por darle solución a la guerra con más guerra, lo que tampoco mostró resultado alguno.

El conflicto armado interno es una colisión de intereses que influye sobre la economía de cualquier país, ya sea de forma transitoria o constante y repercute de modo diferente sobre alguno o todos los componentes del PIB y por consiguiente

en el crecimiento económico¹¹. Partiendo de esto, vemos como el comportamiento de la economía nacional, pese a la presencia del conflicto, ha sostenido un crecimiento anual promedio, superior incluso, al de países de la región sin presencia de conflicto.

No se quiere decir con esto que solo el conflicto es el único factor que influye en la dinámica económica del país. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, el primero entre las economías emergentes Civets¹² y el séptimo en el mundo¹³. La disparidad social y la cada vez más amplia brecha que existe en la distribución del ingreso nacional, son asuntos que sumados a la corrupción, clientelismo y oportunismo político; obstruyen el desarrollo económico, productivo, tecnológico y de investigación de los distintos sectores de la economía.

Se calcula que el conflicto le cuesta al Estado colombiano cerca del 3% del PIB anual¹⁴. Esta responsabilidad económica del Estado acarrea una desviación de los recursos destinados a la inversión en desarrollo y producción de los diferentes sectores de la economía, además de aplazar la ejecución de políticas públicas y sociales que generen un mejoramiento en la calidad de vida de la población. Tenemos como ejemplo de esta situación que sectores como la salud y la educación, considerados derechos fundamentales, son cada vez más excluyentes y de menos acceso para el grueso de los colombianos.

Aunque en esta investigación se analizarán los efectos económicos del conflicto de los trece años previos al inicio de los diálogos en La Habana, no podemos obviar que los más de 6 millones de desplazados, 200 mil asesinatos, 25 mil desapariciones forzadas, 27 mil secuestrados, más de 16 mil asesinatos selectivos, 1982 masacres y los miles de reclutamientos forzados que se han llevado a cabo

¹¹ Díaz, Ana M. y Sánchez, Fabio. "Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano". Universidad de los Andes-Editorial Norma 2008.

¹² Mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

¹³ Lars Christian Moller, Economista Senior del Banco Mundial en Colombia. Portafolio marzo de 2012.

¹⁴ Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación. www.dnp.gov.co/portalweb/

desde finales de la década de los años 50 son realmente la pérdida más grande que este enfrentamiento ha generado¹⁵.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General. Identificar los efectos que la violencia ligada al conflicto armado interno ha generado en el crecimiento y desarrollo económico colombiano, mediante un análisis a la evolución de los distintos indicadores del accionar bélico y los parámetros sociales. Discriminando desde luego de la violencia en general, aquella que está netamente ligada al conflicto.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Examinar los costos directos del conflicto armado interno: los costos generados por daños a la infraestructura física, los generados por el secuestro, por el desplazamiento forzado, por las extorsiones y los gastos en defensa y seguridad nacional.
- Analizar los costos indirectos del conflicto armado interno: los costos por la pérdida de productividad, el impacto en la distribución de la riqueza, la inadecuada asignación de los recursos y la disminución de la inversión.
- Determinar los costos del conflicto armado interno en términos porcentuales del producto interno bruto.
- Establecer el comportamiento del comercio exterior en el marco de la conflictividad.

¹⁵ <http://www.verdadabierta.com/>

- Entender por qué la trayectoria del conflicto colombiano, a pesar de su constancia y continuidad no ha permitido a ninguno de los actores activos resolver la guerra a su favor.

1.4 METODOLOGÍA

El procedimiento metodológico que se empleará para el desarrollo de esta investigación, se describe a continuación:

- Recopilación de información, esta puede ser virtual o en medios físicos ya sean estudios realizados, información oficial y/o proyectos desarrollados sobre los efectos económicos del conflicto armado en nuestro país.
- Con la revisión de la literatura haremos un análisis de los costos directos e indirectos que ha dejado el conflicto armado colombiano y determinaremos los efectos sobre los indicadores económicos y sociales.
- En la parte final del proyecto se cuantificará el crecimiento de la economía en un escenario de posconflicto, por medio de una proyección estimada del producto interno bruto.
- Por último se realizarán las conclusiones respectivas.

2. MARCO TEÓRICO

Cada una de las teorías económicas tiene una visión propia con respecto a la relación que pueda haber entre el conflicto armado y el desarrollo económico de los países. Mientras unas no consideran el conflicto como un determinante del comportamiento económico, otras coinciden en que hay una relación directa entre los dos.

Los economistas clásicos y los neoclásicos, no fundamentaron sus investigaciones en escenarios con la presencia de enfrentamientos bélicos, sino en ambientes de tranquilidad, afines con la acumulación de capital presente en sus análisis. Estas dos corrientes convergen en los supuestos de los cuales parten para hacer sus enunciados: la perfecta definición de los derechos de propiedad y el respaldo institucional con que cuentan; la libertad de elegir que poseen los agentes económicos y la forma como optimizan los recursos¹⁶.

En el capítulo I del libro V de “Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones” Adam Smith justifica los gastos de defensa: “Para defender a la sociedad de ataques, hay que tener una fuerza militar, a la cual se debe sostener tanto en la paz como en la guerra, con los gastos que esto implica” refiriéndose a la guerra más como acto de glorificación personal que como un factor influyente en el desarrollo económico.

Con respecto a la relación entre conflicto y economía, los fisiócratas afirman que la guerra no incide en el comportamiento económico, por el contrario, es el mal manejo de una economía lo que puede desencadenar en una guerra.

¹⁶ Restrepo, Jorge “Análisis Económico de Conflictos Internos”, Fundación Ideas para la Paz 2003.

La guerra como influencia en el comportamiento económico de los países solo vino a ser tomada en cuenta a comienzos del siglo XX, en la “Teoría del Equilibrio Económico” de Wilfredo Pareto publicada en 1901, en donde además de analizar el comportamiento del consumidor, afirma que del historial de estabilidad que presente una nación dependerán su nivel de renta y su desarrollo económico. Pareto considera que el conflicto es un enfrentamiento por la distribución de la producción que termina en la desviación de recursos de labores productivas hacia labores improductivas¹⁷. Al igual que Pareto, Walras ve el conflicto armado como un factor negativo para el desarrollo económico¹⁸.

El marxismo maneja una visión semejante al considerar la lucha de clases como un conflicto constante dentro de la sociedad. Esta misma visión la mantiene el institucionalismo con Veblen (1927) y Commons (1934), al debilitar la hipótesis de derechos de propiedad e incluirla como un causante del conflicto en la economía.

El Premio Nobel de Economía 1992 Gary Becker, incluyó en 1968 en el modelo neoclásico al crimen y al delito como parte del conflicto¹⁹, aunque esto ya había sido expuesto por Tryge Haavelmo en 1954, al proponer un modelo económico que incluyó las actividades bélicas y criminales como parte de los factores incidentes en el comportamiento de la economía. Este autor se refiere al conflicto como una manifestación de la lucha por la distribución de una cantidad de producto entre diversas regiones, que influye en cada uno de los elementos de la sociedad, con costos para unos y ganancias para otros; concluyendo que el fin del conflicto se dará cuando deje de ser una actividad lucrativa.

¹⁷ Restrepo Botero, Darío. “Descentralización y violencia en Colombia” en Economía, Crimen y Conflicto, Astrid Martínez Ortiz (editora), Banco Santander Central Hispano / Universidad de Alcalá, España / Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2001.

¹⁸ Restrepo, Jorge. “Análisis Económico del Conflicto Interno”. Mimeo, Departamento de Economía, Royal Holloway, Universidad de Londres 2001.

¹⁹ Martínez, Astrid, Economía, Crimen y Conflicto. Bogotá 2001.

En su obra “Consecuencias Económicas de la Paz” (1919) al hacer una crítica al Tratado de Versalles, Keynes sugiere que los costos que implique una guerra deberán ser conseguidos más por imposiciones que por endeudamiento, ya que el endeudamiento sólo desataría una inflación persistente.

Tanto neoclásicos como institucionalistas y marxistas lograron desarrollar una metodología que hace posible interpretar las incidencias económicas que pueden tener las acciones de violencia dentro de un escenario con presencia de conflicto. Estos métodos cuentan con la aceptación de los economistas colombianos, que los han venido aplicando sucesivamente en el estudio del conflicto armado del país.

3. ORIGEN DEL CONFLICTO COLOMBIANO

En la clasificación de conflictos internos, según el Reporte Anual de Conflictos Armados²⁰, se distinguen tres estados en lo que al origen de los mismos se refiere: i) Búsqueda de control del Estado; protagonizado por grupos revolucionarios con una identidad ideológica propia bien definida; (categoría del conflicto colombiano) ii) Formación del Estado; en este grupo están los conflictos entre regiones de un mismo país, en busca de la descentralización, aunque en algunos casos las connotaciones étnicas o religiosas son las que priman. iii) Fallas del Estado; cuando el gobierno no garantiza el cumplimiento de las leyes, una justa repartición del ingreso y cobertura en bienes y servicios públicos, se desarrollan conflictos violentos que la misma incapacidad estatal no puede controlar²¹.

El origen del conflicto colombiano está ligado a un conjunto de componentes sociales, políticos y económicos entre los que sobresalen: la debilidad del Estado, los enfrentamientos por la repartición de la tierra, la desigualdad económica y social, y la represión y persecución en contra de quienes manifiesten ideales diferentes al oficialismo de turno. Estas características enmarcaron los diferentes enfrentamientos civiles acontecidos durante los siglos XIX y XX en el país.

El conflicto colombiano es liderado por la guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP y la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional UC-ELN; grupos surgidos de la exclusión política cuando en 1958 se creó el Frente Nacional y se repartió el poder entre los dos grandes partidos tradicionales, dejando fuera de los procesos políticos

²⁰ Project Ploughshares, Armed Conflict Report 1999. Project Ploughshares es una organización canadiense no gubernamental que trabaja para promover políticas y acciones para prevenir la guerra y la violencia armada. Categorizan cada conflicto usando la sencilla tipología de los conflictos armados dentro del estado moderno basado en tres tipos: la superposición de control del Estado, la formación del Estado y el fracaso del Estado.

²¹ Echeverry, Juan C; Salaza, Natalia y Navas, Verónica. "El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional". Seminario Cede Uniandes, mayo 2000.

a los grupos de presión. Estas dos guerrillas llegaron a controlar la mitad del territorio colombiano, con cerca de 10 mil militantes²².

En respuesta al surgimiento de los movimientos guerrilleros se conformaron los grupos paramilitares. El paramilitarismo, entendido como un movimiento de ultraderecha, se creó y afianzó para salvaguardar los intereses privados de sectores del agro con potestad económica y política. Es así, como el accionar de los grupos paramilitares se ha encauzado en el combate contra los grupos de izquierda, entendidos como movimientos sindicalistas, estudiantiles, campesinos y guerrilleros, que se han propuesto modificar las élites de la economía y el poder en el país, mediante manifestaciones y protestas sociales como las marchas, huelgas y paros o en el caso de las guerrillas, por medio de la lucha armada.

Ante la necesidad de entender las razones de la existencia y dinámica del actual conflicto armado, la Mesa de Diálogos de La Habana creó mediante un acuerdo la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CMHCV)²³. A esta comisión se le encomendó la tarea de producir un informe sobre el origen y responsabilidad del conflicto y el impacto causado sobre la población civil²⁴.

Respecto al inicio del conflicto armado, el informe muestra tres enfoques –con percepciones diferentes– ubicados en una línea de tiempo comprendida entre 1920 y 1980.

²² Juan Manuel Santos Calderón en alocución por radio y televisión el 28 de agosto de 2012.

²³ La CMHCV fue instaurada el 5 de agosto de 2014 y la componen 12 expertos y dos relatores, escogidos en conjunto por las partes negociadoras: 1. Daniel Pécaut: Sociólogo francés y experto en temas de Colombia.

2. Francisco Gutiérrez Sanín: Investigador y profesor del Iepri, Universidad Nacional. 3. Gustavo Duncan: Investigador de la Universidad de los Andes. 4. Jorge Giraldo: Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la U. EAFIT. 5. Vicente Torrijos: Profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la U. del Rosario. 6. María Emma Wills: Investigadora del Centro de Memoria Histórica. 7. Renán Vega: Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. 8. Alfredo Molano: Sociólogo, escritor y columnista. 9. Darío Fajardo: Profesor de la U. Externado y gestor de las Zonas de Reserva Campesina. 10. Jairo Hernando Estrada Álvarez: Profesor de Departamento de Ciencia política de la Unal. 11. Malcolm Deas: Historiador británico especialista en temas de Colombia. 12. Sergio de Zubiría: Filósofo, investigador y profesor asociado de la Universidad de los Andes. Los relatores: Víctor Manuel Moncayo (exrector de la Universidad Nacional) y Eduardo Pizarro Leongómez (expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación)

²⁴ El informe de la CMHCV está compuesto por ensayos realizados por cada uno de sus integrantes de forma individual y con autonomía académica; representando el principal elemento de la actividad desarrollada por los dos relatores.

Que la génesis del conflicto colombiano está ligada a los acontecimientos de 1929/30²⁵ y 1957/58²⁶, que marcaron los designios de la patria, es la visión que al respecto tiene Sergio de Zúbará. Darío Fajardo, Javier Giraldo y Jairo Estrada; coinciden en afirmar que en la década de los años 20 se produjeron los primeros brotes de violencia causados por la lucha de tierras, que sigue siendo un punto básico dentro del conflicto²⁷.

Un segundo enfoque ubica el origen del conflicto entre las postrimerías del Frente Nacional y los años 80 con el auge del narcotráfico. Para Francisco Gutiérrez Sanín el periodo de La Violencia (1948–58) fue una respuesta a circunstancias diferentes al conflicto actual. Fue un período de ataques masivos que en contra de la población civil ejecutaron los gobiernos de turno con el fin de diezmar a sus adversarios políticos²⁸. Gustavo Duncan y Vicente Torrijos coinciden al afirmar que si bien la contienda partidista inspiró el surgimiento de las guerrillas, los acontecimientos posteriores al Frente Nacional muestran otros protagonistas con propósitos, razones y métodos distintos²⁹.

Para Daniel Pécaut y Alfredo Molano el conflicto actual fue gestado en un escenario de inequidad y exclusión tanto política como económica. La Violencia, los conflictos agrarios de los años 20, la represión a movimientos populares campesinos e indígenas y el hostigamiento a las corrientes de corte socialista contribuyeron notablemente al fortalecimiento y continuidad del conflicto³⁰.

²⁵ Fin de la hegemonía conservadora, incremento del conflicto social fuera de los partidos tradicionales y la crisis del 29, entre otros.

²⁶ La dictadura de Rojas Pinilla.

²⁷ Fajardo, Darío "Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana" Giraldo, Javier "Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos" Estrada, Jairo "Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada"

²⁸ Gutiérrez, Francisco "¿Una historia simple?"

²⁹ Duncan, Gustavo "Exclusión, insurrección y crimen" Torrijos, Vicente "Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano"

³⁰ Pécaut, Daniel "Un conflicto armado al servicio del statu quo social y político" Molano, Alfredo "Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)"

Para esta investigación se toma el periodo comprendido entre 1990 y 2013, debido a que en este lapso ya los grupos armados ilegales se habían desviado de sus objetivos políticos iniciales de largo plazo. La idea de hacerse al poder se fue desdibujando en la misma medida en que la expansión territorial de estos grupos se dirigió a territorios con recursos naturales y mineros relevantes para la economía de la nación, y, la fortalecida industria del narcotráfico pasó a formar parte del respaldo financiero del conflicto, favoreciendo la prolongación del mismo³¹.

³¹ Richani, Nazih “Conflictos Intrincados: Economías políticas de los sistemas de Guerra en Líbano y Colombia” Kalulambi Pongo, Martin (Ed.) Perspectivas Comparadas de mercados de violencia. Bogotá: Alfaomega y Iepri de la Universidad Nacional de Colombia 2003.

4. CAUSAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO

La explicación de las causas de la existencia de un conflicto armado interno tiene diversos enfoques, entre los cuales se destacan dos hipótesis opuestas: 1) el conflicto como resultado de factores económicos, y, 2) el conflicto originado por el mismo Estado³².

Sobre las causas del conflicto colombiano algunos de los expertos en el tema sostienen diversas apreciaciones. Mientras algunos indican que no es posible entender las causas del conflicto, sin hacer uso de la memoria cronológica que permita tener alguna claridad acerca del por qué la violencia es una constante en la historia, tanto remota como reciente del país³³; otros consideran que si bien la violencia del presente es eco de lo acontecido en el pasado, sus protagonistas y actividades se pueden analizar solo tomando en cuenta las postrimerías del Frente Nacional³⁴. También hay para quienes se hace más viable analizar las causas del conflicto, tomando como referente acontecimientos en una línea de tiempo discontinua, con características propias pero relacionados entre sí: los conflictos agrarios de los años 20, la Violencia de los años 50 y el conflicto actual³⁵.

Como un breve elemento contextual, es necesario esbozar algunos de los determinantes implícitos dentro de la violencia generada por el conflicto interno en Colombia:

- ✓ Escasa presencia del Estado en algunas regiones del territorio nacional.

³² Rojas Aravena, Francisco "Seguridad Humana, Prevención de Conflictos y Paz en América Latina y el Caribe" Francisco Rojas & Moufida Goucha Editores. Compilación de artículos de la reunión de expertos "Paz, Seguridad Humana y Prevención de Conflictos en América Latina y el Caribe, organizado por UNESCO y FLACSO. Santiago de Chile 26-27 de noviembre 2001.

³³ Vega Cantor, Renán "La Dimensión Internacional del Conflicto Social y Armado en Colombia" Injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado. Espacio Crítico Bogotá 2015.

³⁴ Informe CMHCV. Duncan, Gustavo "Exclusión, insurrección y crimen"; Giraldo, Jorge "Política y guerra sin compasión"; Gutiérrez, Francisco "¿Una historia simple?" y Torrijos, Vicente "Cartografía del conflicto: Pautas Interpretativas Sobre la Evolución del Conflicto Irregular Colombiano" La Habana, febrero de 2015.

³⁵ Informe CMHCV: Pécaut, Daniel "Un conflicto armado al servicio del statu quo social y político"

- ✓ Criminalización a integrantes de movimientos políticos y sociales por manifestar su inconformidad mediante la protesta.
- ✓ Incremento de la corrupción al interior de diferentes organismos estatales.
- ✓ Identificación ciudadana con la violencia.
- ✓ Mercado regionalismo que limita la interacción entre los agentes económicos, políticos y sociales.
- ✓ Abuso de poder de parte de las autoridades locales en regiones con poca presencia del Estado.

4.1 CAUSAS ECONÓMICAS

Colombia es el país más desigual de Sudamérica, y ocupa el puesto 12 a nivel mundial en este aspecto³⁶. La pobreza y la desigualdad son detonantes del desarrollo económico de la nación al igual que la exclusión de los sistemas de educación y salud, la falta de oportunidades laborales y la falta de credibilidad en el sistema judicial.

Como se expuso anteriormente, el conflicto como resultado de factores económicos y el originado por el mismo Estado, son dos de las hipótesis de los distintos enfoques que explican las causas de la existencia de este flagelo en una nación. La primera, se basa en el supuesto del racionalismo económico de los individuos, en tanto que la segunda expone que factores como el desempleo, la pobreza, la concentración de la riqueza y de la tierra y la inflación provocan un malestar social que se evidencia en manifestaciones de protesta contra el Estado.

La hipótesis del racionalismo económico es la esencia de la economía política moderna y es la metodología con la cual la teoría económica intenta explicar los orígenes, trayectoria, cambios y finalización de un conflicto armado³⁷. En el marco

³⁶ Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Agosto 2015.

³⁷ Restrepo, Jorge A. y Aponte, David. "Guerra y Violencias en Colombia: Herramientas e Interpretaciones". Editorial Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 2009.

del conflicto colombiano, algunos especialistas del tema sostienen que la violencia es una respuesta del racionalismo económico.

La violencia generada desde el conflicto colombiano, y los fallidos intentos de negociación entre el Estado y los grupos ilegales, son resultado de la fragilidad y vulnerabilidad del aparato judicial del país. El incremento de los actos de violencia relacionados con el conflicto, han sido alentados por el fortalecimiento del narcotráfico y el crecimiento de la industria petrolera³⁸. De otro lado, la violencia proveniente desde el narcotráfico se vio incentivada por la falta de compromiso del Estado, que asumió esta actividad ilícita como un asunto internacional³⁹.

La descentralización experimentada en el país a comienzo de los años ochenta, resultó incrementando los actos de violencia de los grupos subversivos, que encontraron en este hecho una oportunidad de financiamiento, ya que ampliaron su radio de acción, iniciaron la toma y saqueo de las poblaciones, debido a que el Estado no tomó los correctivos indicados antes de otorgar autonomía a las autoridades municipales⁴⁰.

De la descentralización político administrativa de los municipios, también nace la figura del “clientelismo armado”, un modo de financiamiento subversivo que aprovecha la debilidad estatal y la inconsistencia de la rama judicial, para apropiarse de los bienes públicos usando para ello la fuerza, la intimidación y las armas⁴¹.

³⁸ Montenegro, Armando; Posada, Carlos y Piraquive, Gabriel. “Violencia, Criminalidad y Justicia: Otra Mirada Desde la Economía”. Coyuntura Económica. Bogotá: Fedesarrollo 2000.

³⁹ Echeverry, Juan Carlos. y Partow, Zeinab. “Por qué la justicia no responde al crimen: el caso de la cocaína en Colombia”. Cárdenas, Mauricio y Steiner, Roberto Compiladores. “Corrupción, Crimen y Justicia. Una Perspectiva Económica”. Bogotá: Tercer Mndo, Fedesarrollo y Lacea.

⁴⁰ Sánchez, Fabio y Chacón, Mario. “Conflicto, Estado y Descentralización: del Progreso Social a la Disputa Armada por el Control Local, 1974-2002”. IEPRI. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del Conflicto en Colombia. Bogotá: Editorial Norma - Universidad Nacional de Colombia 2006.

⁴¹ Rubio, Mauricio “Conflicto y Finanzas Públicas Municipales en Colombia”. CEDE 2002-17. Bogotá: Universidad de los Andes 2002.

Quienes se enfocan en que el conflicto es originado por el mismo Estado, no pretenden afirmar que la criminalidad y la violencia son efectos causados por la pobreza y la desigualdad. Exponen que la marcada diferencia social existente en el país deja ver la vulnerabilidad de las instituciones que en incumplimiento total de sus funciones dejan fuera del escenario político, social y económico a un sector de la población; estas exclusiones se hacen elementos relevantes en el establecimiento de los episodios de violencia, que comprometen a las instituciones y al mismo Estado.

Desde el Neoinstitucionalismo, se visualiza a la violencia como parte del cambio institucional. En este enfoque no es posible una teoría general debido a que no se pueden obviar las particularidades de cada uno de los eventos de violencia en la historia de una nación. En las situaciones donde el crimen y la violencia están presentes, la relación entre los distintos agentes socioeconómicos es más compleja que donde no predominan estos flagelos. Las marcadas diferencias sociales no son solo perceptibles en la estratificación de las clases socioeconómicas, sino también en la contrastante distribución geográfica, generadora de inconformidades que alimentan la conflictividad gestora de crimen y violencia⁴².

En un estudio realizado en 1987, la Comisión de Estudios sobre la Violencia argumentó que la desigualdad, la pobreza y la ausencia de educación y cultura son las causas objetivas de la violencia en Colombia; pero hay quienes sostienen que la sesgada distribución de los recursos se convierte en el principal precursor de la violencia, incluso más que la pobreza misma⁴³.

Pero ninguna de estas dos hipótesis, la del racionalismo económico y la del Estado como causante del conflicto, han logrado explicar por completo las causas del

⁴² Corredor, Consuelo. "Reformas institucionales en Colombia". Economía Institucional 2001.

⁴³ López, Cecilia y García, Arturo. "Los Costos Ocultos de la Paz en Colombia". Solimano, Andrés; Sáez, Felipe; Moser, Caroline y López, Cecilia. Ensayos sobre Paz y Desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional. Bogotá: Banco Mundial 2000.

surgimiento de la violencia en Colombia, como tampoco responder el porqué de su ininterrumpida trayectoria por más de 50 años.

4.2 CAUSAS POLÍTICAS

La complejidad sobre las causas del conflicto en Colombia, no permiten puntualizar acerca del origen de las mismas. Una explicación en la que coinciden diversos investigadores del tema, refiriéndose a los factores políticos e institucionales, señalan la debilidad y fragilidad estatal como detonante del conflicto violento y su prolongada trayectoria. Dentro de este consenso, hay quienes apuntan a señalar la concentración política, la impunidad, la ausencia del Estado y las luchas territoriales como aceleradores del conflicto, consecuencia de la vulnerabilidad estatal⁴⁴.

La topografía colombiana, sumada a la incapacidad del Estado para ejercer soberanía en la totalidad del territorio nacional a lo largo de la historia, son argumentos expresados por diversos autores al hacer referencia sobre las causas del conflicto interno⁴⁵, por tanto, la presencia del Estado acompañada de la creación de un conjunto de políticas participativas e incluyentes son factores cruciales ante un proceso de negociación entre las partes activas del conflicto⁴⁶.

Luego del Frente Nacional, quedó al descubierto la falta de criterio y objetividad del gobierno para el planteamiento de una política de seguridad ejecutable y coherente con las necesidades de la población⁴⁷. Elementos como el recrudecimiento del conflicto, la aparición de ejércitos ilegales y el fortalecimiento de los carteles del

⁴⁴ Sánchez, Fabio: "Las Cuentas de la Violencia: Ensayos Económicos Sobre el Conflicto y el Crimen en Colombia Bogotá, Colombia: Norma 2007.

⁴⁵ Holmes, Jennifer; Gutiérrez de Piñeres, Sheila y Curtin, Kevin: "Drugs, Violence, and Development in Colombia: A Department-Level Analysis". Latin American Politics & Society 2006.

⁴⁶ Chernick, Marc W. "Acuerdo Posible: Solución Negociada al Conflicto Armado Colombiano". Bogotá, Ediciones Aurora 2008.

⁴⁷ Leal B, Francisco: "Políticas de Seguridad: de Improvisación en Improvisación" En la Encrucijada Colombia Siglo XXI. Editorial Norma, Bogotá 2006.

narcotráfico; son el resultado de la falta de control gubernamental en algunas regiones, y ese vacío institucional está siendo ocupado por los grupos ilegales.

En las zonas donde el poder es ejercido por los grupos ilegales, y los factores económicos como la minería ilegal y los cultivos ilícitos son motivo de lucha entre estos grupos, el incremento de la violencia es bastante considerable. Esta situación desemboca en la adhesión de criminales al escenario político mediante el ejercicio de funciones constitucionales, que en aras del poder han generado la expropiación de tierras a campesinos, comunidades indígenas, dominio de la población y por ende el desplazamiento forzado⁴⁸

Pero no solo la debilidad estatal se vislumbra en las zonas donde los actores armados ilegales se han posicionado en el poder. Hay una clara falta de entereza del Estado desde las mismas instituciones. Factores como la desigualdad y la pobreza no son suficientes para ser las únicas causantes del conflicto violento en Colombia. La corrupción, la forma como procede el sistema judicial, y la impunidad frente al crimen son causas institucionales de las cuales se debería partir para dar respuesta a los interrogantes sobre el origen, dinámica y consecuencias del mismo.

4.3 CAUSAS SOCIALES

La importancia de la sociedad civil y su impacto sobre las causas de la violencia han sido objeto de estudio por parte de diferentes analistas del tema. Algunos de estos estudios objetan sobre la existencia de una cultura de violencia arraigada en el tejido social colombiano, según el cual los colombianos encuentran en la violencia un mecanismo para la resolución de diferencias de tipo político, económico y social⁴⁹. También desde la sociología se analiza la hipótesis que señala la violencia familiar y las discordias dentro del entorno, como causales de la pérdida de valores y de

⁴⁸ *Ibíd.*

⁴⁹ Sriram, Chandra: "Confronting Past Human Rights Violations: Justice vs. Peace in Times of Transition". New York, USA: Frank Cass 2004.

unión que desembocan en el rompimiento del tejido social. Otro análisis se centra en el papel que juega la sociedad colombiana que no está activa dentro del conflicto, pero que podría jugar un papel decisivo en la resolución del mismo, aunque queda en el aire el cuestionamiento de si la violencia de las últimas décadas ha debilitado los movimientos sociales volviéndolos inestables, o si por el contrario, la violencia ha generado otros movimientos vitales en la disminución de la misma⁵⁰.

Algunos análisis sobre las causas sociales del conflicto colombiano parten de la importancia que tenía el ser liberal o conservador a mediados del siglo XX, no solo para la estructura política nacional, sino también en la búsqueda de una identidad propia de los ciudadanos adscritos a cualquiera de estos dos partidos. La necesidad de identificarse con algunas de estas corrientes políticas, intenta llenar el vacío dejado por el efímero desarrollo de una identidad nacional global, incluyente y externa a las corrientes políticas tradicionales⁵¹.

Era tal el fervor con que el pueblo manifestaba su identidad partidista, que este hecho parecía disculpar las acciones violentas en los que se incurría en los debates políticos. Más allá del referente acerca de la existencia de las subculturas políticas⁵² y los odios heredados, son escasos los estudios que intentan aclarar el por qué individuos cobijados bajo una misma bandera y unidos en torno a la misma fe, terminaron matándose entre ellos, originando así el periodo de La Violencia.

Durante La Violencia (1948-1962), se usó toda forma de agresión como mecanismo de lucha por alcanzar el control del Estado, por parte de los cabecillas de los dos partidos existentes en la vida política nacional. La confrontación de estas dos corrientes aunque fue animada por los líderes de ambos partidos, se convirtió en

⁵⁰ LeGrand, Catherine: "The Colombian crisis in historical perspective". Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies 2003.

⁵¹ González, Fernán; Bolívar, Ingrid J y Vázquez, Teófilo: "De la Nación Fragmentada a la Construcción del Estado" Bogotá: CINEP, 2002.

⁵² Pécaut, Daniel: Orden y Violencia. Evolución Socio-política de Colombia entre 1930 y 1953" Bogotá: Norma, 2001 y "Acerca de La Violencia de los años cincuenta", Boletín Socioeconómico No 17 Marzo de 1987.

una lucha armada provocada por la parcialización abierta de Laureano Gómez, líder conservador y presidente de la República entre 1950 y 1953.

Contrario al mandato constitucional acerca de la participación activa en política, los funcionarios de la rama judicial y los agentes de la Fuerza Pública militaban en alguno de los dos partidos existentes, lo cual intensificó las acciones violentas en todas las regiones del país. Otro factor relevante en el incremento de los actos violentos acontecidos en esta época fue la acción instigadora de la iglesia católica al pronunciarse en favor de los estatutos conservadores, justificando desde la moral, la ética y el púlpito todo discurso y todo accionar antiliberal y anticomunista⁵³.

La oposición entre los partidos, la concepción absoluta del bien y del mal y la inexistencia de un punto medio entre amigo y enemigo se perfilan como la dualidad de la sociedad, dado que ni liberales ni conservadores concebían la idea de compartir algún fundamento que permitiera la pacificación del escenario político nacional.

⁵³ Pécaut, Daniel: "Violencia y Política en Colombia". Elementos de reflexión (Medellín: Hombre Nuevo/Universidad del Valle, 2003); y Abel, Chistopher: "Política, Iglesia y Partidos en Colombia" Bogotá faes/Universidad Nacional de Colombia, 1987.

5. TRAYECTORIA DEL CONFLICTO ARMADO

Existen diversas definiciones de Conflicto Armado Interno, de las cuales, la más común se fundamenta en el número parcializado de muertes que este genera. En particular, el Reporte Anual de Conflictos Armados⁵⁴ clasifica a un país como experimentando un Conflicto Armado Interno si presenta más de 1000 muertes por este criterio. Colombia cumple con este requisito para que se reconozca la presencia de conflicto en su territorio, ya que como se expuso anteriormente, el GMH⁵⁵ reveló que se han documentado 220.000 muertes ligadas a este flagelo entre 1958 y diciembre de 2012.

Se podría afirmar que La Violencia, marcó el inicio del conflicto armado actual. Este episodio desembocó en la realización de un pacto mediante el cual el poder sería alternado entre los dos partidos tradicionales -liberal y conservador- durante 16 años consecutivos, a partir de 1958. Con este acuerdo se vislumbraba una estabilidad no tanto política ni económica, sino también social, por la entrega de armas de parte de los rebeldes. Contra todo pronóstico, quedaron dispersas algunas células de antiguos caudillos liberales, que dieron origen a las FARC-EP en 1964, grupo que desde entonces ha permanecido activo dentro del conflicto.

Para precisar sobre la trayectoria del conflicto, retrocederemos unos años del periodo de tiempo del cual nos estamos ocupando, ya que fue antes de 1990 que se llevó a cabo el fortalecimiento de los grupos paramilitares, protagonistas activos también en la historia del conflicto armado actual.

La ausencia de apoyo político del Partido Conservador al Presidente Betancur y la política anticomunista del Ejército Nacional no hicieron posible madurar el proceso

⁵⁴ Reporte anual entregado por el secretario de la ONU

⁵⁵ Grupo de Memoria Histórica

de paz que se venía fraguando desde 1982. Parte de lo pactado en este proceso en 1984, obligó al Ejército a cesar todos los operativos en contra de los grupos alzados en armas. Fue fácil para la insurgencia y los paramilitares aumentar su pie de fuerza los siguientes años. La Farc, de tener 8 frentes en 1978 sumaba 65 frentes en 1995. Por su parte el ELN que contaba con tan solo 3 frentes en 1978, en 1995 llegó a 32. En el caso del EPL cuya desmovilización se llevó a cabo en 1990, sumaba solo 5 frentes en 1995⁵⁶. En tanto que los Paramilitares en 1997 conformaron las AUC, un solo ejército de cerca de 16 mil hombres, que operaban bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil.

Ante el fallido intento de paz del gobierno Betancur saboteado desde su mismo partido, el Gobierno Barco adoptó un modelo de paz sin contenido político, institucional y tecnocrático, basado en la inversión de obras de infraestructura cuya finalidad era facilitar el acceso geográfico a las zonas aisladas afectadas por el conflicto, mediante el Plan Nacional de Rehabilitación⁵⁷. Quitarle espacio a la guerrilla pero continuando con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas fueron los pilares de la estrategia de este gobierno para combatir a los grupos insurgentes. Se trataba de intervenir en los territorios con poca presencia estatal con miras a su recuperación. El camino a la pacificación del conflicto no podía ser un objetivo aislado, sino que debía tener como principio el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones y la organización política del país⁵⁸.

Este fortalecimiento de las instituciones se acompañó de reformas democráticas como la primera elección popular de alcaldes, un paso importante hacia la descentralización política y administrativa, que intentaba reforzar una visión menos

⁵⁶ Echandía, Camilo. "Expansión Territorial de la Guerrilla Colombiana: Geografía, Economía y Violencia" En Malcom Deas y María Victoria Llorente (compiladores), "Reconocer la Guerra Para Construir la Paz", Bogotá, Cerec, Ediciones Uniandes, Editorial Norma, 1999,

⁵⁷ DECRETO 2707 DE 1993, El PNR es un programa especial de la Presidencia de la República que como parte integral de la política de paz y normalización de zonas afectadas por desequilibrios del desarrollo, debilidad en la presencia institucional del Estado y conflictos sociales...

⁵⁸ Bejarano, Jesús "La política de paz durante la administración Barco" Deas, Malcom y Ossa, Carlos, coordinadores, Política, economía y desarrollo social. El gobierno Barco, 1986-1990, 79-98, FEDESARROLLO-Fondo Cultural Cafetero; Bogotá.

drástica del orden público, cuya intención era ejercer más control sobre las Fuerzas Armadas, nombrando a un civil como Procurador de las mismas y la conformación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos⁵⁹.

A todas estas nuevas medidas, hay que agregarle el reconocimiento de las fuerzas izquierdistas dentro del escenario político, así como el reconocimiento de la Unión Patriótica como partido⁶⁰. Esta situación, provocó una tensión entre de las Fuerza Armadas y el Gobierno, que generó un notable crecimiento de las autodefensas, quienes protagonizaron una sangrienta represión en contra de la población civil, con ejecuciones, masacres y asesinatos selectivos.

De aquí se deriva la consolidación de los grupos paramilitares del Magdalena Medio y el surgimiento de nuevos grupos en Córdoba, Cesar, la Sierra Nevada, Casanare, los Llanos Orientales y Putumayo. Todas estas agrupaciones armadas estaban al servicio del narcotráfico, y contaron con el respaldo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que se negaron a condenar sus acciones, y por el contrario, aprobaron el Manual ejc-3-10, que ratificaba desde el Ministerio de Defensa a las Juntas de Autodefensas como fuerza de respaldo en la lucha contra la insurgencia⁶¹.

A comienzos de los noventa se vive un recrudecimiento del conflicto, como resultado de la quinta cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar⁶², en la que se planificaron acciones en contra de las Fuerzas Armadas y atentados contra la infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. En tanto que las FFAA cumplían con la primera parte de la Operación Casa Verde, una misión ejecutada por miembros de la VII Brigada, con el objetivo de tomar campamentos del Estado Mayor del Bloque Oriental. La segunda etapa de esta misión se llevó a cabo el 9 de

⁵⁹ Decreto Presidencial 2111 de 1987

⁶⁰ La Unión Patriótica surgió como resultado de los pactos entre el gobierno, las FARC y el EPL. Esta fuerza política fue extinguida por organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares. Uno de los mayores genocidios políticos del mundo, aún sin esclarecer.

⁶¹ GMH, La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia (Bogotá: Taurus/ Semana, 2010).

⁶² Participaron el ELN, las FARC y la fracción del EPL encabezada por su líder histórico Francisco Caraballo.

diciembre (día de elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente) cuanto la IV División del Ejército ocupó los campamentos del Secretariado Nacional de las FARC en la Uribe, Meta.

La respuesta de las FARC no se hizo esperar y entre enero y febrero de 1991 intensificó los ataques, alcanzando los niveles más altos hasta el momento. En marzo del mismo año se baja el nivel de actividad al aceptar conjuntamente FARC y ELN la propuesta de diálogo por parte del gobierno Gaviria⁶³. En julio, un mes después de iniciadas las conversaciones, y cuando la Asamblea Nacional proclamada la nueva Constitución, la Coordinadora Guerrillera retoma la realización de atentados y asaltos.

Tras el fracaso de las negociaciones de paz en Venezuela y México, las FARC realizaron la Octava Conferencia⁶⁴, con el fin de planificar avanzadas, reagrupar sus frentes en siete bloques e intensificar sus acciones en contra de la Fuerza Pública y los organismos del Estado. Entre 1995 y 2002 se lleva a cabo su mayor crecimiento en pie de fuerza, lo que les permitió consolidar su territorialidad al sur del país.

Entre 1998 y 2002, durante el gobierno Pastrana, este grupo guerrillero usó la zona de distensión⁶⁵ para avanzar hacia el Pacífico y aumentar su fuerza armada. Durante el tiempo que duró el fallido proceso, las FARC se mostraron como un Estado incipiente incapaz de beneficiarse del momento político que ofrecían los diálogos, al no convocar a la opinión pública alrededor de los posibles cambios pronosticados camino al socialismo⁶⁶ Las FARC dejó en evidencia que su interés

⁶³ Las conversaciones entre las guerrillas del CGSB y el gobierno de Cesar Gaviria comenzaron en junio de 1991 en Caracas, Venezuela, donde el mismo año se reunieron en dos ocasiones. Los diálogos de paz se trasladaron a la ciudad de Tlaxcala, México, ante el Golpe de Estado de febrero de 1992 en Venezuela.

⁶⁴ 27 de mayo al 3 de abril de 1993.

⁶⁵ Entre 1998 y 2002 el entonces presidente Pastrana lideró un diálogo con la guerrilla de las FARC, a la que le entregó la zona del Caguán desmilitarizada mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998. Esta zona comprendía 42 mil Km² y se mantuvo desde enero de 1999 hasta el 21 de febrero de 2002.

⁶⁶ Pécaut, Daniel: "Las FARC, ¿Una guerrilla sin fin o con fines?" Bogotá: Grupo Editorial Norma 2008.

en este proceso no era otro diferente a expandirse militarmente y desde la zona despejada planificar estrategias que atentaran contra la institucionalidad del país.

Entre tanto, el debilitamiento del ELN se evidencia desde 2001 por la reducción en su pie de fuerza, como resultado de los ataques, emboscadas y enfrentamientos con miembros de las autodefensas; y también por el hostigamiento de la Fuerza Pública. La decadencia militar de este grupo ha generado acercamientos con el gobierno en busca de una propuesta de paz con participación social.

Entre 2002 y 2010, se lleva a cabo la elección y reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Su gobierno está señalado por favorecer el incumplimiento de todos los derechos humanos, sociales y políticos. Es el presidente que en el mundo ha ganado más apoyo político de congresistas financiados por el narcotráfico y vinculados con el paramilitarismo; quien consiguió la más grande expulsión de campesinos y refugiados: 4 millones; el que ha permitido más bases militares extranjeras que cualquier otro gobernante del continente.⁶⁷

Durante su mandato, Uribe implementó la política de Seguridad Democrática, que mediante el gasto en defensa y seguridad, se enfocaría en controlar las condiciones de orden público que representarían al país mejor bienestar social para todos. La instauración de esta política conlleva a destinar mayor porcentaje del gasto en aumento del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y mejoramiento y adquisición de equipo militar de combate e inteligencia: helicópteros, aviones, equipo de comunicación y equipo técnico, entre otros. Durante este periodo los homicidios se reducen 39%, el secuestro disminuyó 83% y 61% los atentados contra la infraestructura⁶⁸.

En los ocho años del Gobierno Uribe, las FARC sufren el mayor declive a lo largo de su historia. Entre los golpes propinados por el gobierno a esta organización se

⁶⁷ Petras, James: "Uribe y su record mundial" Voltairenet.org. Abril 27 de 2010

⁶⁸ Informe Ministerio de Defensa 2009.

destacan: i) la captura y extradición de Simón Trinidad⁶⁹, ii) en una operación militar contra un campamento de las FARC en Ecuador son dado de baja Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", y otras 25 personas, iii) en marzo de 2008 muere alias Tirofijo y es asesinado alias Iván Ríos, miembro del mando central. Las diferentes bajas, desmovilizaciones, y capturas debilitaron la estructura militar de este grupo, que a partir de 2012 está adelantando negociaciones de paz con el Gobierno Santos.

Estos logros en materia de seguridad se vieron empañados con las consecuencias que generó el Pacto de Santa Fe de Ralito, llevado a cabo el 23 de julio de 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el Gobierno Pastrana. El pacto tuvo como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política del paramilitarismo en el Gobierno de Uribe Vélez.

Cuatro senadores, siete diputados, cinco alcaldes, dos gobernadores, dos ganaderos y un periodista –ente otros– junto a Jorge 40, Salvatore Mancuso, don Berna y Diego Vecino firmaron un pacto de alianza para consolidar un movimiento político a escala nacional, con el fin de refundar la patria, crear un pacto social y construir una nueva Colombia⁷⁰.

El documento se hizo público solo hasta enero de 2007 y, según la Fiscalía, este pacto fue la refrendación de la alianza entre la clase política tradicional de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar y los jefes de las AUC con el fin de influenciar con su poder territorial y económico a los senadores y representantes del Congreso, para afianzarse políticamente y obtener ventajas en caso de iniciar un proceso de negociación.

⁶⁹ Ovidio Ricardo Palmera Pineda, miembro del Secretariado y jefe de finanzas de las FARC

⁷⁰ Pacto de Ralito Documento Confidencial y Secreto http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-1367_2007119.pdf

La alianza entre paramilitares y funcionarios del Gobierno se hizo evidente mediante la parapolítica⁷¹, un fenómeno que superó en cifras al polémico proceso 8000 del Gobierno Samper. A 2007, 34 de los 102 Senadores electos en 2006, eran investigados por nexos con este grupo armado, al igual que 25 de los 168 Representantes a la Cámara. Superando así, la permeabilidad que en su momento tuvo el narcotráfico en el máximo órgano legislativo del país⁷². Las investigaciones referentes al tema de la parapolítica aún están en proceso.

5.1 PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO

La figura del Frente Nacional, creada para disuadir la violencia partidista, discriminó toda forma de organización política que no estuviera adherida a alguno de los partidos tradicionales. En parte como respuesta a esta exclusión y a los elevados niveles de concentración de la propiedad de la tierra, durante esa época se comenzaron a formar grupos guerrilleros de origen campesino en las áreas rurales localizadas donde había poca presencia del Estado. Estos grupos han evolucionado desde entonces en términos de su presencia en el territorio y su fortaleza militar.

Anterior a la década de los ochenta, los protagonistas del conflicto colombiano fueron solo los grupos guerrilleros y las fuerzas del Estado, y el escenario del conflicto se ubicaba principalmente en zonas rurales, con escasa presencia estatal⁷³. Posterior a los años ochenta el accionar de los grupos armados ilegales amplió su radio de acción hacia los centros urbanos, para así captar mayores rentas como medio de financiación de sus actividades; por lo cual surgieron nuevas organizaciones que cambiaron la dinámica que traía el conflicto.

⁷¹ Escándalo político nacional por la filtración del narcotráfico y el paramilitarismo en diversas esferas del poder público y la clase política tanto regional como nacional.

⁷² López, Claudia y Sevillano, Oscar: "Balance político de la parapolítica" Investigadores del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

⁷³ Pizarro Leongómez, Eduardo. Una democracia asediada: balance y perspectiva del conflicto armado en Colombia (2004) Bogotá: Norma.

El crecimiento del crimen organizado, la emersión del paramilitarismo y la consolidación del narcotráfico como fuerza económica de financiamiento de los grupos ilegales, ha desviado a éstos de sus objetivos iniciales; incrementando así la magnitud del conflicto, haciendo de éste, un episodio más económico, más criminal y más político⁷⁴. Los actores del conflicto armado interno en Colombia son:

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP: El origen de este grupo guerrillero data de mediados de la década de los años 50, tiempo en el que se conformaron algunos grupos campesinos de autodefensas de ideología comunista en el sur del Tolima y los Llanos Orientales. La conformación de este grupo armado se da como una fuerza de reacción contra los abusos y excesos de fuerza aplicados por el gobierno conservador durante el periodo de La Violencia. El 14 de junio de 1964 el Ejército Nacional asalta la población de Marquetalia, Tolima; refugio de un puñado de campesinos comandados por Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo". Lo que parecía ser una exitosa operación militar derivó que estas autodefensas campesinas se formaran el movimiento guerrillero más poderosa del país⁷⁵, al dar origen al Bloque Sur⁷⁶ en la Primera Conferencia Guerrillera⁷⁷.

Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional, UC ELN: Este movimiento surgió en 1965 en el departamento de Santander. Los fundadores de esta guerrilla fueron intelectuales de clase media. Algunos eran miembros del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, fundado por Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda a finales de los años cincuenta, como oposición al Frente Nacional⁷⁸. Una fracción del ELN denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994,

⁷⁴ Gutiérrez, Francisco y Sánchez Gonzalo (2006). "Prologo, Nuestra guerra sin nombre". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Norma.

⁷⁵ Vélez, María A: "FARC-ELN. Evolución y expansión territorial" Documento CEDE 2002.

⁷⁶ El movimiento pasó a conocerse como "BLOQUE SUR", ya que estaba situado al sur del departamento de Tolima, confluencia de los departamentos de Huila, Cauca y Valle.

⁷⁷ Llevada a cabo en Marquetalia a finales de 1965. Debido al fortalecimiento adquirido se proyectan hacia nuevas metas, planificando estrategias militares y propaganda política. Uno de los puntos esenciales fue mantener la perennidad del Movimiento.

⁷⁸ Rodríguez B, Nicolás: "Ejército de Liberación Nacional Una Historia" Enero de 1993.

en el gobierno de César Gaviria Trujillo, un acuerdo de desmovilización. En la actualidad, aunque siguen activos militarmente, están en busca de un acercamiento con el gobierno Santos para una posible desmovilización.

Autodefensas: El origen del paramilitarismo o autodefensas actuales data desde comienzos de la década de los años ochenta, debido a la Ley de Amnistía⁷⁹ e Indulto decretados bajo el gobierno de Belisario Betancurt, en un intento fallido por iniciar negociaciones de paz con los grupos armados ilegales. Los efectos que acarrearán las políticas de paz de Betancurt fueron desaprobadas por ganaderos y terratenientes de Puerto Boyacá, quienes acosados por los grupos guerrilleros, decidieron conformar grupos de autodefensas con el fin de respaldar a las fuerzas del Estado en su lucha contra la subversión. Igual decisión tomaron en diversas regiones del país los latifundistas, ganaderos y empresarios para protegerse de la extorsión, boleteo y secuestro, con que se financiaban los grupos guerrilleros⁸⁰.

Durante estos primeros años de funcionamiento, los ejércitos paramilitares gozaron del financiamiento proveniente de la clase pudiente de las diferentes regiones y, en algunos casos del mismo Estado⁸¹. Para mediados de la década de los años noventa se produce la unificación de los grupos paramilitares, dando así origen a las llamadas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, comandados por los distintos líderes regionales que conformaron el Estado Mayor de las AUC.

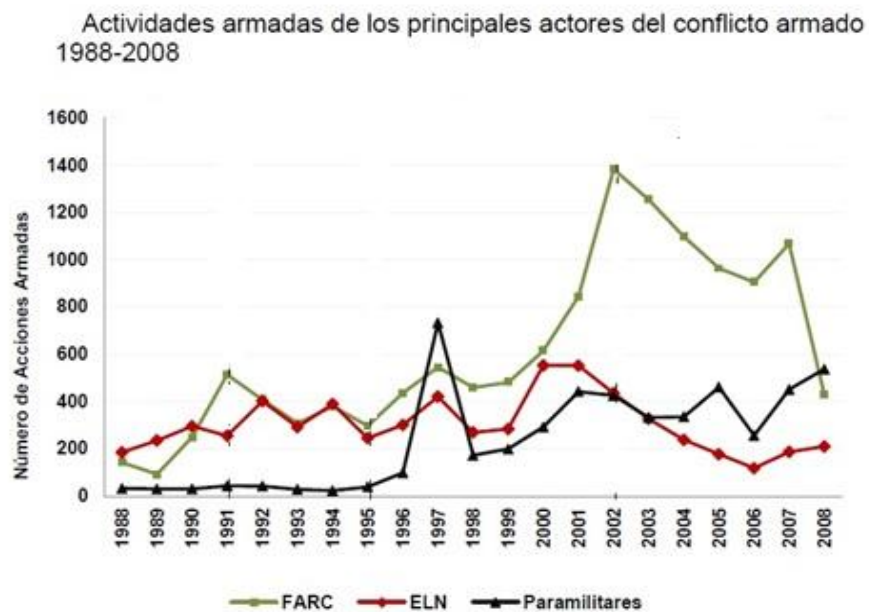
⁷⁹ La amnistía se ideó como una forma de insertar a los infractores políticos al sistema electoral colombiano, reconociendo las barreras y fallas de la organización política nacional, así como los problemas estructurales de disparidad social, que están relacionados directamente con el origen de la violencia política del país. La Ley 35 de 1982 concedió amnistía general para todos los autores de crímenes políticos y autorizaba la financiación de programas para la rehabilitación y reinserción de los alzados en armas, los cuales incluían programas de rehabilitación, dotación de tierras y educación, entre otros. De la misma forma, la Ley 49 de 1985 le otorgó una autorización al Presidente de la República para conceder indulto a condenados por este tipo de delitos, con la posibilidad de extenderlo a delitos conexos.

⁸⁰ Así se conformaron las Autodefensas de Córdoba y Urabá de los hermanos Castaño Gil, las Autodefensas de Ramón Isaza en el Magdalena Medio, los grupos armados de San Martín en Meta, las Autodefensas de Santander, los grupos armados del Valle del Cauca, las Autodefensas de Cundinamarca y los grupos armados al servicio del narcotráfico en Arauca, Putumayo y Caquetá.

⁸¹ Carrillo, Vladimir y Kucharz, Tom: "Colombia: Terrorismo de Estado. IV La guerra sucia contra los opositores políticos en Colombia". Cepeda, Iván y Girón, Claudia. Icaria Editorial 2006.

Pese al proceso de desmovilización de este grupo⁸²., llevado a cabo desde el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara, hasta el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas; no fue impedimento para que una parte de su personal armado se mantenga activo al servicio del narcotráfico.

Grafica 1. Actividades armadas de los principales actores del conflicto armado 1958-208



Fuente: CERAC

Gobierno: es el único actor con presencia legal dentro del conflicto, por su origen democrático. Esta legitimidad también le faculta ser el Comandante General de las Fuerzas Armadas y por ende dirigir todas las operaciones en contra de los actos que atenten contra la democracia y soberanía del país.

⁸² La desmovilización de las autodefensas se lleva a cabo durante el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, producido en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito.

Fuerzas Armadas: están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación. Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la Constitución del año 1991, tales como velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia, así como velar por el mantenimiento del orden constitucional.

Policía Nacional: es la encargada de mantener el orden público interno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, pero es de naturaleza civil. Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno.

Población Civil: Es el único protagonista no armado dentro de este enfrentamiento. Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas, RUV⁸³ de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha. Este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1º de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del GMH. El conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos — personas no combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario— los más afectados por la violencia⁸⁴.

Según el informe suministrado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada doce horas fue secuestrada

⁸³ El Registro Único de Víctimas fue creado a partir del Artículo 154 de la Ley 1448 del 2011 como un mecanismo para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas de la violencia en Colombia.

⁸⁴ Informe General Centro Nacional de Memoria Histórica 2013.

otra. El periodo 1996-2005 fue el más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayó cada día en una mina antipersona.

6. LA ECONOMÍA DEL CONFLICTO

La relación economía conflicto se da mediante la forma en que los grupos ilegales vulneran al Estado por medio de la instauración de una economía ilícita, que discrepa los cimientos económicos del poder central. Como primera medida, afectan las actividades económicas sobre las cuales se basa la economía nacional, mediante atentados contra el capital físico, natural y humano; originando costos directos e indirectos. En segunda instancia tenemos que a través que de la economía ilegal misma que originan, se desprenden tres ítems: el no aporte a la seguridad social que merma las bases del sistema; la persuasión de mano de obra del sector productivo a sus filas y por último, la generación de dificultades en el aspecto político ya que los indicadores del PIB se distorsionan produciendo con esto que las políticas establecidas no sean totalmente eficientes⁸⁵.

Teniendo en cuenta lo prolongado del conflicto colombiano, el detrimento económico por año es relativamente bajo. Sin embargo, la acumulación de las pérdidas anuales arroja resultados relevantes. La dimensión del impacto sobre la vía de acumulación de capital varía de acuerdo a la capacidad que posean los agentes económicos para adaptarse al conflicto, ya que dependiendo de la intensidad del mismo, se ven afectadas la toma de decisiones por parte de los individuos en lo que al ahorro, consumo e inversión se refiere.

El conflicto interno incide negativamente sobre el capital humano, físico y social, el deterioro de la infraestructura social genera un ambiente poco propicio para las ganancias en productividad, lo que hace que una recuperación económica ante un

⁸⁵ Martínez, Héctor: "La economía subterránea e ilegal en Colombia". Elementos para el estado del arte sobre conflicto y economía. Universidad Nacional de Colombia 2010.

posible postconflicto dependa en gran parte del restablecimiento de las relaciones y credibilidad de las instituciones estatales con la comunidad⁸⁶.

La relación inversa entre el conflicto y la acumulación de capital humano se evidencia de diversas formas. Por un lado están las víctimas fatales y discapacitados generados por la guerra; y por otro está el desplazamiento forzado, que conlleva a la deserción escolar y al desempleo, lo que disminuye considerablemente la calidad de vida de las familias afectadas⁸⁷. Además está la prestación del servicio militar obligatorio, que le extrae parte del capital humano al sector productivo. Las consecuencias devastadoras del conflicto sobre el capital físico se evidencian de forma directa con los atentados a las infraestructuras tanto públicas como privadas, ya que reduce los factores productivos, disminuye la inversión presente y ahuyenta inversiones futuras. Indirectamente, la intensidad y persistencia del conflicto, obliga al Estado a invertir más en defensa y seguridad que en actividades productivas que fomenten la acumulación de capital⁸⁸. El aumento en el gasto militar, tienen sus propias implicaciones económicas ya que su financiamiento requiere generalmente de mayores impuestos y endeudamiento interno, lo que desencadena en un desplazamiento de la inversión productiva y presión fiscal que hace que la incertidumbre aumente a futuro disminuyendo así la rentabilidad⁸⁹.

6.1 COSTOS DIRECTOS DEL CONFLICTO

Estos costos hacen referencia a los costos generados por las pérdidas de capital físico, humano y natural que afecta todo los sectores de la economía y la sociedad.

⁸⁶ Arango, Carolina: "Terrorismo y seguro de terrorismo. Consideraciones de carácter jurídico, económico y social". Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá 2005.

⁸⁷ Vargas, Juan: "Conflicto interno y crecimiento económico en Colombia". Universidad de los Andes. Tesis Maestría en Economía 2003.

⁸⁸ Restrepo, Jorge A: "Análisis Económico de los Conflictos Internos". Documento de trabajo publicado por Fundación Ideas para la Paz 2001.

⁸⁹ Cárdenas, Mauricio Fedesarrollo; Junguito, Roberto Fedesarrollo: Nueva Introducción a la Economía Colombiana: con la colaboración de: Camilo García Jimeno, Catalina Herrera, Juan Felipe Quintero, María Fernanda Rosales y Sumie Tamura.

6.1.1 Daños a la infraestructura. Los daños sobre la infraestructura física, tanto pública como privada; representan costos elevados para los diferentes sectores de la economía, modificando de forma directa los esquemas de producción y distribución de los recursos. Como ejemplo tenemos los costos ocasionados desde la década de los años noventa contra la estructura petrolera, el sector energético y las vías de comunicación. Tan solo durante el período 1999-2003 ocurrieron 2.082 atentados a la infraestructura económica del país. El 2002 concentró el mayor número de ataques 657, mientras que el menor número ocurrió en el 2003 con 226 casos. Además, el 65% de estos atentados fueron dirigidos a la infraestructura eléctrica y un 28% de ellos afectaron la estructura de transporte de petróleo del país⁹⁰.

El sector más afectado por las acciones terroristas, fue el de la industria petrolera, principalmente las perpetradas contra los oleoductos. La estructura del transporte del crudo operada por Ecopetrol que comprende alrededor de 6.668 Kilómetros, ha sufrido 2.575 atentados desde mediados de los años 80. El oleoducto Caño Limón – Coveñas ha sido el más afectado con 1.283 ataques terroristas, seguido por San Miguel – Orito con 589. La mayor cantidad de ataques se perpetraron en 2001 con un total de 253, mientras que el menor número de voladuras se produjo en 1987 con tan solo 11. Esta situación ha ocasionado que durante este periodo se dejaran de producir 5.700 barriles diarios en promedio, generando pérdidas por más de \$503.000 millones, con lo que bien se habrían construido 50 mega colegios o 5.800 viviendas de interés social⁹¹.

⁹⁰ Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación: "Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003 Octubre de 2004.

⁹¹ Revista e+ No. 8 Ecopetrol 2015

Grafica 2. Número de voladuras de oleoductos 1990 -2006



Los gastos asumidos por la industria petrolera, incluyen la reparación de oleoductos y pérdida del crudo derramado ya que por cada cien barriles vertidos, sólo se recuperan entre 25 y 30⁹²; que sumados a los costos de descontaminación del medio donde se producen los atentados, representan solamente el 60% del total del costo de los daños⁹³. Los archivos señalan que la mayoría de atentados se han concentrado geográficamente en zonas históricas de retaguardia de los frentes guerrilleros de las FARC y del ELN: en el Catatumbo, en Arauca, en el Bajo Putumayo y en el andén pacífico nariñense y caucano.

El oleoducto Trasandino (OTA) transporta el crudo desde Orito en el Putumayo hasta el terminal marítimo de Tumaco en Nariño. Recorre cerca de 306 km de selva virgen y montañosa de 11 municipios nariñenses, donde el apoderamiento ilícito del crudo para ser procesado en refinerías ilegales y ser utilizado en la industria del

⁹² Marco Tulio Restrepo, coordinador de seguridad de Ecopetrol

⁹³ Granada, Camilo y Rojas, Leonardo "Los costos del conflicto armado 1990-1994" Revista de Planeación y Desarrollo Vol XXVI No 4, 1995.

narco tráfico y la minería clandestina, es otra de las formas como se depreda el sector de los hidrocarburos por parte de los alzados en armas que operan en la zona. Debido a estas acciones desde 1999 la región ha dejado de recibir \$460.200 millones de regalías y la empresa pierde en promedio 300 mil barriles al año⁹⁴.

El sector de la producción de energía eléctrica, que represente el 15,33% de los costos por ataques a la infraestructura entre 1985 y 2004⁹⁵ fue impactado en 116 ocasiones tan sólo entre 1991 y 1996⁹⁶. Esta cadena de atentados ocasionó costos superiores a los \$1500 millones, destinados a atender la emergencia, restituir las líneas de transmisión dinamitadas y la restauración de los generadores y centrales averiadas. Estos atentados tuvieron un notable incremento a comienzos del milenio. Entre 1999 y 2003 los daños causados a las torres de energía y comunicación superan los \$134.000 millones, lo que equivale a 5.4% del PIB del sector de electricidad, gas y agua del año 2003.

En 2005 la guerrilla dinamitó 227 torres de energía, lo que generó un incremento del 87.6% en comparación con las 121 torres derribadas en 2004. Los meses más críticos fueron noviembre y diciembre cuando se sabotearon 38 estructuras, justo después de conocido el fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección. Las pérdidas, solo para ISA (que transporta el 70% de la energía del país) ascendieron a \$12.000 millones⁹⁷.

El total de torres derribadas para ISA fue de 123, seguida por los ataques contra Epsa del Valle del Cauca con 14 y la Empresa de Energía de Arauca con 13. Gracias a la oportuna intervención de los equipos de reparación de las empresas afectadas, se impidió que se debilitara la totalidad del sistema interconectado, que opera como una enorme telaraña y evitó un apagón generalizado.

⁹⁴ Válvulas ilícitas: ataques silenciosos al medio ambiente. Revista e+ No 8 2015

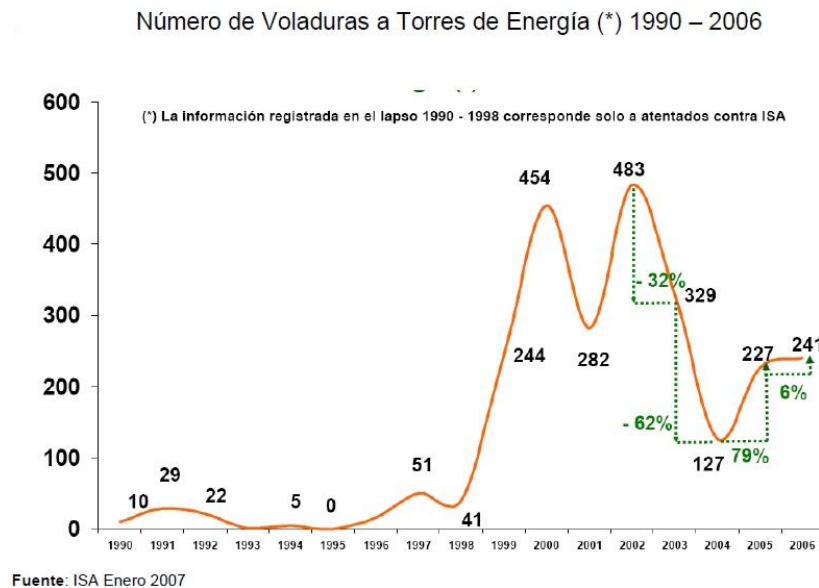
⁹⁵ Otero, Diego: "Las Cifras del Conflicto Colombiano", Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Bogotá 2007.

⁹⁶ Granada, Camilo y Rojas Leonardo. "Los costos económicos del conflicto armado en Colombia: 1990-1994". Archivos de Macroeconomía, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá 1995.

⁹⁷ Cifras del Sistema Interconectado Nacional.

Aparte de la empresa, los usuarios también sienten en sus bolsillos estos altos costos. Los atentados generan tarifas más altas, ya que las restricciones ocasionadas, obligan a usar otras fuentes de energía que son más costosas. En 2004 se presentó un leve receso en las acciones contra la infraestructura, pero el 31 de mayo de 2005 la voladura de siete torres de energía en Antioquia, lo que implicó que buena parte de la Costa Atlántica se quedara sin el servicio. La región tuvo que valerse de la generación térmica, que, al no suficiente para cubrir los 1400 megavatios que demanda la zona en el horario nocturno; obligó a las empresas Electrocosta y Electricaribe a programar racionamientos sectorizados para cubrir parte de ese déficit.

Grafica 3. Número de voladuras a Torres de energía (*) 1990-2006



En Junio de ese mismo año fueron dinamitadas siete torres más, esta vez en veredas del Cauca que dejaron a oscuras 96 municipios. Para cubrir esta emergencia ISA tuvo que importar energía desde el Ecuador. En noviembre se dinamitaron dos torres de la Epsa que generaron un apagón de más setenta horas en el puerto de Buenaventura, además de la suspensión de servicios de Telecom y Orbitel y la declaración de emergencia de su hospital.

En cuanto a los atentados contra la infraestructura vial, entre 1993 y 1995 se dinamitaron once peajes y un puente, cuya reconstrucción alcanzó un monto cercano a los \$379 millones, cifra que se multiplica considerablemente entre 1999 y 2003 cuando los atentados ocasionaron costos que superaron los \$18mil millones, cifra correspondiente al 1.71% del total del presupuesto del Instituto Nacional de Vías, INVIAS del año 2003⁹⁸. Para 2004, los costos por daños a la infraestructura vial bajaron sustancialmente, a \$680 millones, provenientes de 113 ataques contra las vías y 7 puentes dinamitados; mientras 2005 presentó la destrucción de 5 puentes y 59 vías averiadas por causa del terrorismo⁹⁹.

Los atentados contra los puentes y las carreteras afectan al total de la población, toda vez que el gremio transportador de alimentos y víveres en general, se paraliza generando escasez de los productos básicos de consumo, y por ende, el encarecimiento de los mismos. De igual forma la obstaculización generada contra el transporte terrestre, impide el libre tránsito de ambulancias y equipos médicos desde y hacia poblaciones donde la cobertura de estos servicios, no es la adecuada para atender casos complejos que requieren traslado a otros centros hospitalarios.

6.1.2 Secuestro y extorsión. En cuanto a los costos generados por secuestro y extorsión, estos pueden ser tanto directos (pago de rescates, medidas de seguridad) como indirectos (efectos del capital humano en cautiverio)¹⁰⁰. Las modalidades del secuestro se dan bien sea con fines extorsivos y políticos o de forma simple que es de carácter netamente económico. Colombia figura como el país con mayor número de víctimas por este flagelo¹⁰¹, que desde 1996 presentó un considerable incremento, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6%, lo que indica que se secuestraron seis de cada 100 mil habitantes¹⁰². Desde 1996 hasta 2003, se

⁹⁸ Informe INVIAS 2004

⁹⁹ Informe del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DHI 2006.

¹⁰⁰ Pinto, María; Altamar, Ivette; Lahuerta, Yilberto y Cepeda, Luis: "El secuestro en Colombia: caracterización y costos económicos". Bogotá: Archivos de Economía, Documento 257, Departamento Nacional de Planeación 2004.

¹⁰¹ Base de datos Fondelibertad.

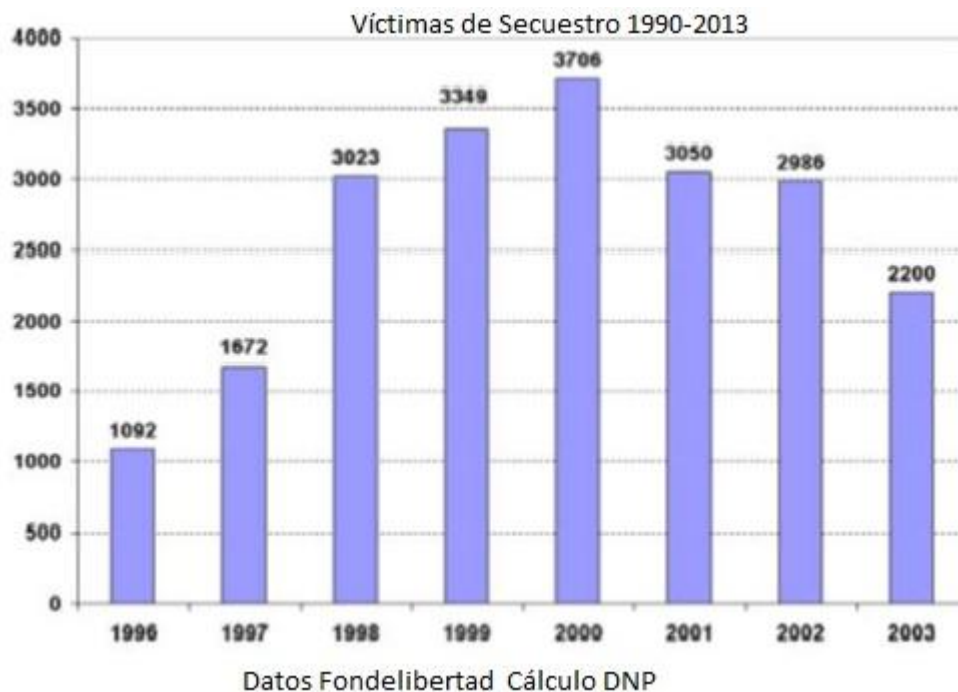
¹⁰² Esta cifra hace referencia al total de secuestrados sin distinción entre civiles, Fuerza Pública o funcionarios del Estado.

reportaron en total 21.078 secuestrados, presentándose el mayor número de plagiados en 2000 con 3.076.

A 2010 de los 32.451 casos de secuestros denunciados, el 79% fue mediante selección previa de la víctima, el 16% fueron plagiados en retenes o pescas milagrosas y el 5% en tomas a poblaciones o emboscadas. De estas víctimas el 43% pagó la suma de \$12.2 billones por concepto rescate¹⁰³.

La extorsión, una práctica que busca mediante la intimidación y el constreñimiento de la voluntad, conseguir alguna ventaja ilícita con que se pretende, en la mayoría de los casos, obtener un beneficio económico¹⁰⁴.

Grafica 4. Víctimas de secuestro 1990 – 2013



¹⁰³ Centro Nacional de Memoria Histórica: "Una verdad secuestrada": cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. Imprenta Nacional, Bogotá 2013.

¹⁰⁴ Gómez, Olga Directora Fundación País Libre.

Las tres tipos de extorsión más comunes son: la vacuna, que es un cobro establecido cada determinado periodo de tiempo con el cual a la víctima, ya sea persona o empresa, se le permite seguir trabajando a cambio del pago¹⁰⁵; el boleteo, es un cobro esporádico que hacen los grupos al margen de la ley a habitantes o empresas de la zona donde tienen dominio; y el peaje, que es también un cobro que hacen estos grupos a cambio de permitir el libre tránsito de vehículos por determinada vía¹⁰⁶.

El delito de la extorsión es cada vez más complejo. En él, los actores involucrados, los medios que utilizan y los objetivos que pretenden, son cada vez más difíciles de identificar¹⁰⁷. Además la extorsión, es una actividad criminal eficaz con costos logísticos y de visibilidad inferior al secuestro¹⁰⁸, lo que facilita que los diferentes actores tengan la posibilidad de cometer el delito sin tener consecuencias. Entre 2003 y 2014 se recibieron 25.842 denuncias por casos de extorsión, cifra muy inferior a los casos reales¹⁰⁹.

El abigeato o robo de ganado es el costo que el conflicto le implica a la industria ganadera. Entre 1999 y 2003 esta actividad delictiva representó para el sector costos por encima de los \$978 mil millones¹¹⁰, equivalente al 8.9% del PIB agropecuario en 2003¹¹¹. Esto demuestra que después del narcotráfico y el secuestro el abigeato se ha convertido también en una importante fuente de ingresos para los grupos ilegales¹¹². En 2003 la guerrilla de las FARC provocó más de \$75 mil millones en pérdidas al sector agropecuario, representado en el robo de 106.934 cabezas de ganado.

¹⁰⁵ Bajo esta modalidad se disfrazan los servicios que prestan los grupos armados y la delincuencia común como medida de protección.

¹⁰⁶ Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación País Libre 2006.

¹⁰⁷ Tomado de Informe FIP, Soborno y Extorsión: Obstáculos para la Construcción de Paz y la Superación del Conflicto en Colombia. Citando a Echandía, 2006.

¹⁰⁸ Política Nacional para la Defensa de la Libertad Personas 2011-2014.

¹⁰⁹ Informe del Centro de Seguridad y Democracia 2014.

¹¹⁰ En esta cifra están incluidas las extorsiones a los ganaderos y afines.

¹¹¹ Datos DNP 2006

¹¹² Resultado de un estudio realizado por Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda

6.1.3 El gasto en defensa y seguridad. En cuanto a la Defensa y Seguridad, este factor, en sí mismo, no genera desarrollo, pero es indispensable para generar un ambiente de seguridad que ofrezca garantías a los distintos agentes económicos. La falta de tales condiciones hace imposible mantener un desarrollo económico sostenido en un ambiente de paz y convivencia¹¹³.

La historia nos muestra, como el gasto militar en Colombia ha respondido a elementos circunstanciales, más que a inclinaciones armamentistas¹¹⁴. Esta situación se evidencia en el comportamiento histórico de este sector, el cual presenta incrementos considerables en episodios específicos de la vida nacional. El recrudecimiento del conflicto desde los años noventa, ha generado controversia entre que el Gasto en Defensa y Seguridad sea empleado en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, y, en mejorar las fuerzas de seguridad para apoyar la posibilidad de edificar un escenario donde la economía y la población coincidan y alcancen sus metas de manera conjunta¹¹⁵.

Entre 1994 y 2004, el nivel del Gasto Militar no alcanza a cubrir los requerimientos de la población para poder desenvolverse fuera del conflicto. Apenas si alcanza para sostener la ofensiva de la Fuerza Pública en contra de los grupos armados, más no para derrotarlos.

Para mejorar esta condición hay dos caminos, el primero es un aumento en el gasto que sea suficiente para incrementar el pie de fuerza y equipar a los elementos de la Fuerza Pública; lo que implica una mayor actividad tributaria, además de un compromiso del Gobierno y las Fuerzas Armadas para optimizar los recursos destinados a la defensa y seguridad¹¹⁶. El segundo es diseñar una estrategia para

¹¹³ Santos, Juan Manuel Ministerio de Defensa, Gasto en Defensa y Seguridad, 1998-2011.

¹¹⁴ Giha, Yaneth; Riveros, Héctor y Soto, Andrés: "El Gasto Militar en Colombia: aspectos macroeconómicos y microeconómicos". Revista de la Cepal No. 69 1999.

¹¹⁵ *Ibíd.*

¹¹⁶ Villamizar, Andrés y Espejo, Germán: "El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: De la contención a la ofensiva". Fundación Seguridad y Democracia 2005.

lograr un acercamiento con los grupos armados y negociar la finalización del conflicto.

Durante el periodo que abarca esta investigación, vemos como los diferentes gobiernos aplicaron sus propias políticas de seguridad, con objetivos específicos, así como un monto presupuestado para la seguridad; sin embargo, se puede observar que el monto asignado para este sector, ha aumentado de manera sostenida.

La llegada al poder de César Gaviria en 1990 se manifiesta en un empeño de fortalecimiento militar e institucional establecido en la reciente Constitución del 91. Durante estos cuatro años el Gasto en Defensa presentó un aumento considerable debido al aumento en el pie de fuerza, adquisición y renovación de equipo de uso para las Fuerzas Armadas. Este gobierno con su Estrategia Nacional Contra la Violencia, aplicó el Estado de Conmoción Interior¹¹⁷ y dio vida a la Ley 4 de 1992, mediante la cual asigna alto rubro de gasto hacia la remuneración salarial del servicio militar en el país. La nivelación salarial de oficiales y suboficiales con el resto de personal del sector público de similar jerarquía, representó un aumento cercano al 100% de los salarios de los miembros de estas instituciones¹¹⁸.

La administración de Samper (1994-1998) expone una política enfocada a la búsqueda de la Equidad y la Solidaridad, mediante la mejora en la distribución de los ingresos y el fortalecimiento del capital social. Una de las principales políticas que buscaba esta reforma se generó mediante modificaciones en las fuentes productivas, por medio de procesos alternativos para la producción de cultivos instaurados con el programa Plante. Esta administración arrojó algunas anomalías en cuanto a la prestación de la seguridad en los municipios donde el Estado no

¹¹⁷ 10 de julio de 1992 el presidente César Gaviria apeló a esa figura para evitar la libertad de procesados (guerrilleros, paramilitares y terroristas) en un periodo donde se estaba dando el tránsito de unas normas a otras. La Corte la respaldó.

¹¹⁸ Rangel, Alfredo y Torres, Uriel: "Transparencia en el presupuesto en defensa. El caso colombiano". En Fundación Seguridad y Democracia 2005.

podía garantizarla. Se implementó la vigilancia privada con el aval de las fuerzas estatales, las Convivir¹¹⁹, que dan origen al paramilitarismo¹²⁰.

Durante el mandato presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) se llevó a cabo el último diálogo formal con las FARC, antes del proceso de La Habana¹²¹. Se creó una zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados en la zona del Caguán. Los puntos a tratar dentro del proceso eran diez y se llamó: "Política de paz para el cambio", allí se contemplaban temas sobre derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, derecho internacional humanitario, entre otras. Este nuevo episodio fallido se abortó por su falta de organización, las irregularidades en la zona de despeje, la falta de voluntad de las Farc y la improvisación del Estado¹²². A su vez, la zona de distensión significó el incremento de la actividad paramilitar, los secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a la población civil.

La presidencia de Álvaro Uribe se fijó en la recuperación del orden público y la seguridad del territorio nacional, ante el fracasado intento de conciliación del gobierno Pastrana. Una de las políticas planteadas en este gobierno destinadas al fortalecimiento del Gasto en Defensa y Seguridad, fue a través del aumento del pie de fuerza; bajo este panorama y como punto de apoyo del Plan Colombia, Uribe utilizó el Plan Patriota¹²³ que estaría reforzado con ayuda militar de los Estados Unidos¹²⁴. En agosto de 2002 bajo el Estado de Conmoción Interior se decretó el impuesto para la Seguridad Democrática, que gravaba el 1.2% sobre el patrimonio

¹¹⁹ Leal, Francisco: "La Inseguridad de la Seguridad, Colombia 1958-2005", Bogotá 2005.

¹²⁰ El gobierno colombiano anunció un Plan para establecer Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, llamados más tarde CONVIVIR. Las CONVIVIR estaban destinadas a las zonas de combate, donde el gobierno dijo que no podía garantizar totalmente la seguridad pública.

¹²¹ Este proceso comenzó a gestarse incluso antes de que Pastrana asumiera el cargo y se instaló formalmente el 7 de agosto de 1999.

¹²² El 20 de Febrero de 2002 el proceso Pastrana - FARC llegó a su fin tras el secuestro del ex congresista Luís Eduardo Gechem, además en el acto, realizado en San Vicente del Caguán, el presidente Pastrana se quedó esperando al jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda, quien nunca llegó.

¹²³ Recuperación del territorio considerado por años la retaguardia profunda de las Farc.

¹²⁴ Arias, Gerson: "Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana". Boletín de conflicto. Fundación Ideas para la Paz 2007.

líquido para quienes contaban con un patrimonio bruto superior a \$169.5 millones¹²⁵, así el Gasto en Defensa en 2003 fue de 5.1% y en 2004 cayó a 4.9%.

Tabla 1. Análisis del Incremento en el Gasto en Defensa y Seguridad: Resultados y Sostenibilidad de la Estrategia

AÑO	GDS	PIB BASE 2005	TOTAL GDS %
1994	1,743,714	79,817,754	2.2
1995	2,464,373	99,799,414	2.5
1996	3,499,135	119,031,782	2.9
1997	4,579,517	143,847,293	3.2
1998	4,957,732	166,038,621	3.0
1999	5,850,589	179,136,171	3.3
2000	6,486,811	208,530,000	3.1
2001	7,698,239	225,851,000	3.4
2002	8,578,069	245,323,000	3.5
2003	9,675,409	272,349,000	3.6
2004	10,916,973	307,759,000	3.5
2005	11,673,911	340,160,000	3.4
2006	12,890,142	383,892,000	3.4
2007	14,396,058	431,076,000	3.3
2008	18,226,918	478,572,000	3.8
2009	19,895,695	503,287,000	4.0
2010	20,194,769	541,442,652	3.7
2011	21,040,012	582,321,991	3.6
2012	22,008,050	624,505,151	3.5

La presidencia Juan Manuel Santos inicia el 7 de agosto de 2010, dos años más tarde, el 26 de agosto de 2012, firma el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, en La Habana, Cuba. En 2011 el PND asignó \$19.05 billones para la paz, de los cuales \$14.89 billones se destinaron para la seguridad y \$4.10 billones para la justicia¹²⁶. El 4 de septiembre de ese mismo año, Santos confirmó que las negociaciones con la guerrilla de las FARC se iniciarían en octubre en Oslo, Noruega.

El cuadro anterior nos muestra que entre el 2000 al 2012 el Gasto en Defensa y Seguridad alcanza los niveles más altos en la historia económica de Colombia.

¹²⁵ Cárdenas, Mauricio; Cadena, Ximena y Caballero, Carlos: “Análisis del Incremento en el Gasto en Defensa y Seguridad: Resultados y Sostenibilidad de la Estrategia”. Fedesarrollo 2005.

¹²⁶ <http://www.olapolitica.com/content/costo-del-proceso-de-paz>

Iniciando en el año 2000 con 3,1% y alcanzado su máximo del 4% en el 2009 como participación del PIB. En el 2010, 2011 y 2012 descendió ligeramente a 3,7%, 3,6% y 3,5% respectivamente¹²⁷.

6.2 COSTOS INDIRECTOS DEL CONFLICTO

Son aquellos costos que no implican necesariamente una asignación directa de recursos, pero si representan un costo de oportunidad. Estos costos tienen mayor impacto en la economía, ya que recaen conjuntamente sobre la sociedad¹²⁸. Los efectos indirectos y menos visibles surgen debido a la presencia de los grupos armados y la imposición de un sistema de gobernanza y normas de comportamiento a la población civil, sembrando terror y generando incertidumbre que causan tan solo con su presencia.

6.2.1 Detrimento a la productividad. La disminución en los niveles de productividad de la tierra, es un efecto negativo que recae sobre la inversión de capital físico, social y la valoración de la tierra misma; impactando directamente a los sectores relacionados con el agro¹²⁹. La pérdida que esto genera, tiene que ser asumida directamente por los productores que sufren los rigores de estar ubicados en medio de la zona de fuego. Dentro de este panorama, los resultados adversos están ligados con la devaluación de las propiedades, la improductividad de las tierras -representada en los productos que no pudieron ser cultivados- y la imposibilidad de administrar eficientemente la tierra. Los datos del DNP sugieren que las pérdidas estimadas por la baja productividad de las tierras representaron más de \$140 mil millones entre 1999 y 2003, cifra equivalente al 1.28% del PIB

¹²⁷ Fuente: Ministerio de Defensa, Banco de la República, Cuentas Nacionales (DANE) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¹²⁸ Pinto, María, Altamar Ivette, Lahuerta, Yilberto y Cepeda, Luis: "Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003". Bogotá: Archivos de Macroeconomía, Departamento Nacional de Planeación. 2003.

¹²⁹ Echandía, Camilo: "El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos". Revista Colombia Internacional, Bogotá, Centro de Estudios Internacionales, Departamento de Ciencia Política 2000.

agropecuario de 2003¹³⁰. Por su parte los productores para evitar ser víctimas de grupos ilegales invierten menos cantidades y tratan de asumir un perfil bajo en el sector, todo esto conlleva a un desincentivo a la inversión en el sector agropecuario¹³¹

6.2.2 Concentración de la propiedad rural. Lo prolongado del conflicto y la amplitud geográfica que abarca, complica la repartición equitativa y justa del ingreso y la riqueza. Tenemos dentro de las consecuencias del conflicto el desplazamiento forzado de millones de colombianos, que han tenido que abandonar más de 4 millones de hectáreas, valoradas en \$2.6 billones¹³². Una extensión seis veces mayor de la totalidad de la tierra entregada por el proyecto de Reforma Agraria durante el periodo 1993-2000. Esta condición desvaloriza las tierras que terminan cayendo en poder de cabecillas de los grupos ilegales o en su defecto, de los latifundistas para quienes trabajan, que las pagan por mucho menos de su costo real. Se cree que cerca del 48% de las mejores tierras están en poder del 1.3% de los terratenientes¹³³, y que las tierras desaprovechadas por el desplazamiento y el narcotráfico representan alrededor de 2,7 puntos porcentuales del PIB agropecuario¹³⁴.

6.2.3 Ley de víctimas. Ley 1448 de 2011: tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición

¹³⁰ Pinto, María; Vergara, Andrés y Lahuerta Yilberto: "Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999 2003". Bogotá: Archivos de Macroeconomía, Departamento Nacional de Planeación 2004.

¹³¹ Pinilla, Felipe: "Impacto del Conflicto Armado Colombiano en la Producción Agrícola Nacional". Universidad de los Andes. Tesis de Maestría en Economía. MIMEO 2013.

¹³² Ibañez, Ana María; Moya, Andrés; Velásquez, Andrea: "Hacia una política proactiva para la población desplazada". Bogotá: Universidad de los Andes, Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia, 2006.

¹³³ Rubio, Mauricio: "El desbordamiento de la violencia en Colombia". En: Londoño, A. Gaviria y R. Guerrero Editores. Asalto al desarrollo: violencia en América Latina. Washington: TXT Edición 2000.

¹³⁴ *Ibíd*

de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

El conjunto regional de las víctimas es muy variado por las características de los victimarios (paramilitares, guerrilla, Estado, bacrim...) y de las mismas víctimas. El primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras 2012 mostró los siguientes resultados: La participación del gasto en víctimas en el PGN para el primer periodo llegó sólo al 0,3%, en el siguiente periodo (2006-2011) subió un punto porcentual de 0,7% en 2006 a 1,7% en 2011. En 2012, el presupuesto asignado fue 1,9% del PGN (0,5% del PIB). Esas cifras muestran el creciente interés del Gobierno Nacional con la problemática presente en PSDF, sin embargo, dada la magnitud del problema de la existencia de una población de víctimas, que fácilmente supera el 10% de la población colombiana, su participación en el gasto es desproporcional.

Tabla 2. Gasto en víctimas en el presupuesto General de la Nación, 2000-2012

Gasto en víctimas en el Presupuesto General de la Nación, 2000-2012
(Miles de Millones corrientes, Definitivo y vigencia actual)

Tipo de gasto y componente	Antes de la Sentencia T-025						Después de la Sentencia T-025						Ley 1448/11
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Funcionamiento	0,18	0,03	0,00	8,5	11,1	2,6	72,7	108,9	116,7	328,1	428,2	596,3	944,1
Asistencia a PSDF	-	-	-	-	-	0,2	51,6	60,4	64,9	271,2	375,1	596,2	902,3
Atención en derechos humanos	0,18	0,02	0,00	8,5	11,1	2,4	21,1	48,6	51,8	56,9	53,1	0,1	41,9
Minas antipersonales	-	0,01	-	-	-	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	-	0,0
2. Inversión	23,5	82,5	50,2	88,8	174,3	245,8	632,2	1.626,9	1.133,4	1.376,9	1.522,7	1.982,9	2.155,1
Asistencia a PSDF	20,0	80,0	45,9	85,6	165,5	241,0	623,2	1.614,2	1.121,3	1.363,6	1.506,0	1.956,1	2.128,8
Atención en derechos humanos	3,4	2,4	4,3	3,2	6,2	4,2	6,4	10,0	9,4	10,4	12,6	16,4	17,7
Minas antipersonales	-	-	-	-	2,5	0,6	2,6	2,7	2,8	2,9	4,0	10,4	8,6
Total	23,6	82,5	50,2	97,3	185,3	248,3	704,9	1.735,8	1.250,1	1.705,1	1.950,9	2.579,2	3.099,3
% Presupuesto General Nación	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7	1,5	1,0	1,2	1,3	1,7	1,9
% PIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5

Fuente: SIF; Cálculos CGR

En el siguiente cuadro se observan los diferentes destinos del gasto del PGN, que muestra que la mayor parte del presupuesto se destina al Bienestar Social con partidas que se incrementaron desde el 44,4% en 2000 hasta el 49,4% en 2012, la composición interna de ese gasto, incluye la Seguridad Social, que reporta los

mayores crecimientos de 12,1% en 2000 a 17,1% en 2012, mientras que el Gasto Social se mantuvo en el 32% en el mismo periodo.

Tabla 3. Distribución del gasto en el presupuesto General de la nación (miles de millones y participación % presupuesto definitivo)

**Distribución del gasto en el Presupuesto General de la Nación
(Miles de Millones y Participación %, Presupuesto Definitivo)**

Sector de gasto PGN	2000		2005		2011		2012	
	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%	MM\$	%
1. Bienestar Social	22.484	44,4	42.598	45,6	78.509	51,9	81.709	49,4
1.1. Gasto Público Social (CGR)	16.384	32,4	27.161	29,1	52.199	34,5	53.523	32,4
Resto GPS	16.360	32,3	26.913	28,8	49.620	32,8	50.424	30,5
Víctimas	24	0,0	248	0,3	2.579	1,7	3.099	1,9
1.2. Seguridad Social	6.101	12,1	15.437	16,5	26.311	17,4	28.185	17,1
2. Defensa	4.155	8,2	7.779	8,3	14.518	9,6	15.429	9,3
3. Justicia	1.682	3,3	2.573	2,8	5.543	3,7	6.308	3,8
4. Agropecuario	365	0,7	411	0,4	1.350	0,9	1.484	0,9
5. Gestión Pública	19.505	38,6	34.895	37,3	40.954	27,1	46.611	28,2
5.1. Deuda	16.205	32,0	31.071	33,2	34.827	23,0	38.367	23,2
5.2. Resto	3.300	6,5	3.823	4,1	6.127	4,0	8.244	5,0
6. Infraestructura	2.001	4,0	2.512	2,7	7.504	5,0	10.314	6,2
7. Minas y Energía	402	0,8	2.707	2,9	2.934	1,9	3.443	2,1
Total PGN	50.594	100	93.475	100	151.312	100	165.298	100

Fuente: SIF; Cálculos CGR

Lo que se puede apreciar en este caso, es que desde el punto de vista de las finanzas públicas, la mayor presión en el crecimiento del gasto proviene de la seguridad social, en particular de las pensiones y no del gasto social, por lo cual, las autoridades gubernamentales deberían ser más sosegadas al sostener que el gasto en víctimas podría generar una presión sobre las finanzas públicas.

El gasto social permanece fijo en 32% a pesar del aumento en el gasto de las víctimas. La Deuda Pública del Gobierno Central disminuyó su participación a lo largo del periodo. El Gasto en Defensa presenta un incremento que se justifica dada la política de Seguridad y la modificación del estatuto tributario. Los recursos dirigidos a las víctimas durante 2000 y 2005 fue el factor más bajo de gasto, y se mantiene así, apenas por encima del sector agropecuario.

El gasto destinado a la atención de víctimas no se consume en su totalidad, lo que se da por el uso de recursos del gasto social tradicional, que provienen del Sistema General de Participaciones (SGP). Esto nos indica que si la información de los menores de 18 años está actualizada en el RUPD, el gobierno nacional debería destinar recursos a través del SGP para brindar atención a las nuevas víctimas. Los cálculos mostraron que el 3.2% del total del SGP en 2002, fue para atender a esta población. Esta proporción se está incrementando en la medida que la población menor de 18 años ha sido desplazada. En 2011, se destinaron 7.6% del total, para la misma causa¹³⁵.

El tema de víctimas¹³⁶ además de complejo es bastante extenso, porque no son solo víctimas los desplazados o los muertos en combate. El documento del Departamento Nacional de Planeación reveló que entre 1999 y el 2003 murieron en combate 1.179 policías y 1.265 miembros de las Fuerzas Militares. La estimación de los costos por pérdida de capital humano (estimada en 742.000 millones en cinco años), se realizó con base en los ingresos que estos colombianos hubieran recibido durante su vida productiva dentro de la institución, hasta la edad de jubilación. También se destaca un rubro sobre las indemnizaciones pagadas a las víctimas de la violencia, por un monto que asciende a \$60.000 millones.

6.2.4 Efectos sobre la inversión. Es reconocido de parte de especialistas en el tema, lo determinante de la inversión para la dinámica económica de una nación. Del nivel de confianza que genere tanto para empresarios nacionales como extranjeros, dependerá también el nivel de crecimiento del sector, que está ligado a la productividad y el empleo. Cuando la confianza inversionista se pierde, el efecto

¹³⁵ Primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. agosto 21 de 2012. Contraloría General de la República/Procuraduría General de la Nación/Defensoría del Pueblo

¹³⁶ La definición de víctima está estipulada en Artículo 3 de la Ley 1448: "... aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida..."

dominó que desencadena afecta todos los componentes del sistema económico, llegando en el peor de los casos a entrar en un estado de recesión o depresión económica.

El nivel de inversión de un país está sometido a tres condiciones: i) los ingresos que se pretendan obtener, ii) los tipos de renta e interés que se impongan a la inversión y iii) de la expectativa y confianza que genere hacía los inversionistas. La presencia y prolongación de un conflicto civil armado influye sobre los agentes económicos que lo asuman como parte de un cambio de la estructura económica¹³⁷. Además, al representar un constante riesgo al que se enfrentan tanto el capital humano como el físico, altera las decisiones de consumo e inversión de los agentes.

En Colombia la inversión, es una de las áreas más impactada por los efectos del conflicto, especialmente por las acciones terroristas derivadas de éste. Las pérdidas para este sector se estimaron en aproximadamente 0.53% del PIB anual, entre 2000 y 2005¹³⁸. La Corporación Invertir en Colombia, Coinvertir¹³⁹, y el Departamento Nacional de Planeación realizaron un estudio cuyo resultado mostró que la situación de inseguridad representa una barrera para la inversión extranjera en los sectores financieros, de hidrocarburos y energéticos. Según este estudio para un inversionista extranjero invertir en Colombia implica que buena parte del capital disponible para este fin, tenga que ser destinado para costear sus propios servicios de seguridad y protección, condiciones que el Estado colombiano no puede garantizar, situación que para la casa matriz representaría un impuesto a la inversión que no está dispuesto a pagar, optando por llevar su capital a un país que le de las garantías suficientes y el riesgo financiero a correr sea mínimo¹⁴⁰. El inversionista extranjero no le teme a la expropiación o las pérdidas económicas

¹³⁷ Echeverry, Juan Carlos; Salazar, Natalia y Navas, Verónica: "Nos Parecemos al Resto del Mundo", Archivos de Macroeconomía Documento 143 2001.

¹³⁸ Álvarez, Stephanie y Rettberg, Angelika: "Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano". 2008.

¹³⁹ Sociedad de economía mixta cuya labor se centra en el apoyo a empresarios extranjeros que se establecen en el país.

¹⁴⁰ Echeverry, Juan Carlos; Salazar, Natalia y Navas, Verónica: "Nos Parecemos al Resto del Mundo" Archivos de Macroeconomía Documento 143 2001

tanto como a la posibilidad de ser víctima de una extorsión, un atentado o un secuestro.

Estudios realizados para la cuantificación de los costos del conflicto, se están enfocando en analizar el impacto de éste sobre el sector privado, toda vez que los costos que debe asumir este sector son extremadamente altos. El sector privado colombiano ha dejado de invertir 0.59% del PIB anual por falta de inseguridad que el orden público provoca.

La violencia generada desde el conflicto afecta directamente los costos de transacción, ya que por cada punto porcentual en que se incremente la tasa de homicidios, la inversión de este sector disminuye 0.66%, reduciendo con ello los niveles de rentabilidad¹⁴¹. La red Construyendo Paz, ConPaz¹⁴², en encuesta realizada con el apoyo del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE e International Alert¹⁴³ mostró que los costos indirectos que deben pagar los empresarios colombianos (empresas grandes con sucursales en todo el país) son mayores que los costos directos¹⁴⁴.

Datos del Ministerio de Defensa en 2009, muestran que con la significativa inversión en Gasto y Defensa realizada durante el gobierno Uribe, se disminuyeron notablemente los niveles de inseguridad y violencia. Esta situación representó un atractivo inversionista tanto extranjero como nacional, repercutiendo de forma positiva sobre el crecimiento económico, a tasas que no se habían alcanzado en la historia económica reciente. El siguiente gráfico muestra una tendencia creciente en el comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia, así mismo la inversión directa realizada por Colombia en el exterior se ha incrementado

¹⁴¹ Parra, Clara: "Determinantes de la inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia", revista Planeación y Desarrollo, Volumen 84, 1998.

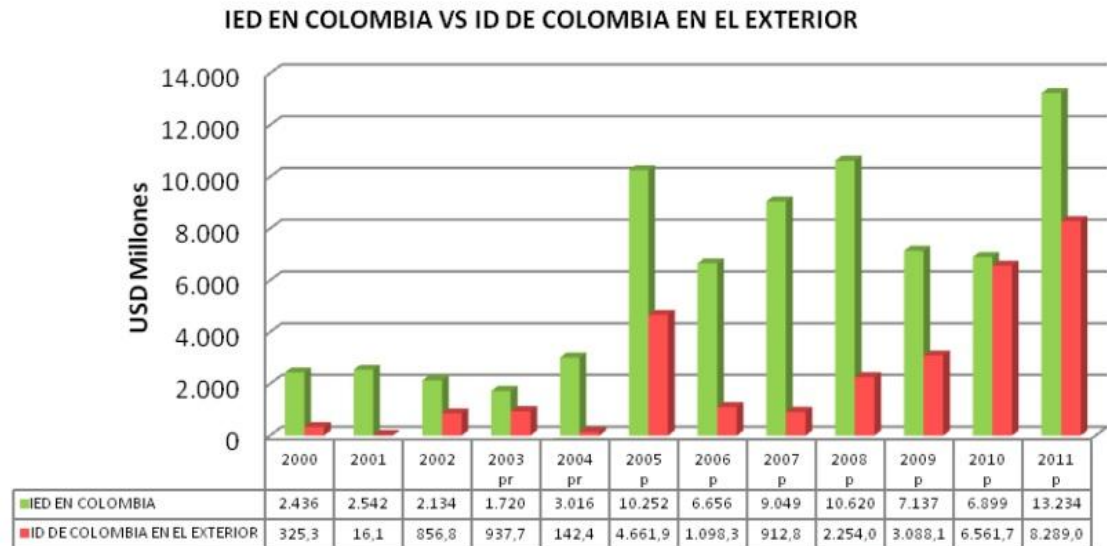
¹⁴² Iniciativa de comunidades y organizaciones que habitan en territorios donde se desarrolla el conflicto armado y se expresan intereses de intervención de empresas privadas nacionales e internacionales sobre los mismos.

¹⁴³ Es una ONG internacional que trabaja en el campo de la construcción de la paz fundada en 1986 en Londres.

¹⁴⁴ Rettberg, Angelika. Los costos del conflicto armado colombiano para el sector privado: Resultados de una encuesta nacional. ConPaz/ International Alert. 2006

gradualmente cada año, pasando de US\$912.8 millones en 2007 a US\$8.289 millones en 2011.

Grafica 5. IED en Colombia Vs en el exterior



Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Balanza de Pagos - Ajustes UPME
pr: Provisional. p: Preliminar

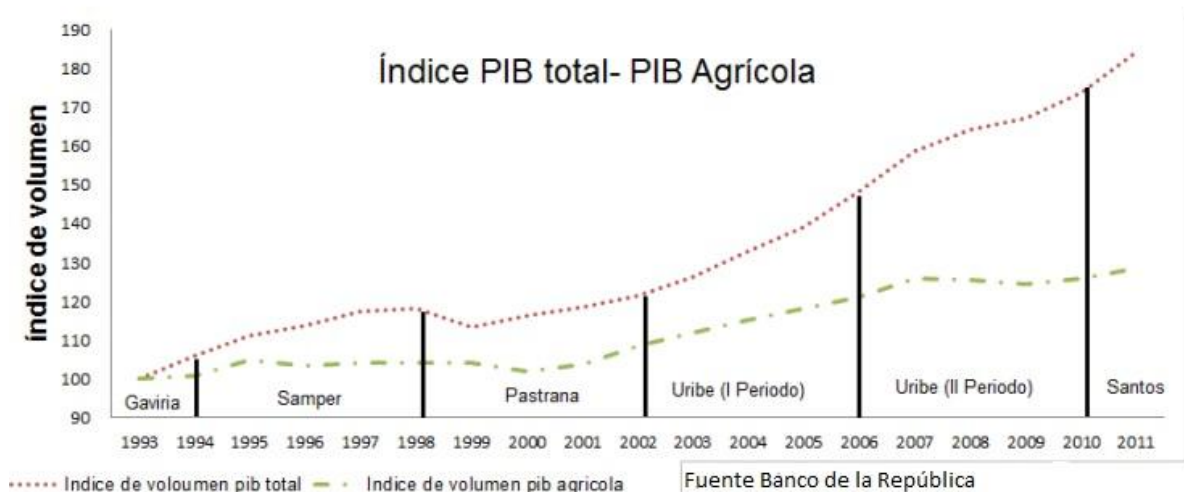
Lo que esto demuestra es un comportamiento de círculo virtuoso donde la inversión en Defensa recrea un ambiente de seguridad propicio y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual favorece el crecimiento al permitir mayor inversión social que genera beneficios a la sociedad.

La confianza inversionista generada por las políticas de Seguridad Democrática también benefició a la industria del turismo, registrándose el mayor número de turistas extranjeros que visitaron el país. La campaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ‘El riesgo es que te quieras quedar’ resultó efectiva: la llegada de visitantes pasó de 1.200.000 en el año 2002 a 2.500.000 en el 2009, es decir, un crecimiento de más del 100%, mientras que en el mundo, ese mismo año el número de turistas decayó 4%¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Ministerio de Comercio Industria y Turismo 2010

A pesar de la dinamización de la economía, uno de los sectores que se quedó rezagado fue el de la agricultura. Fue en este sector donde se produjo el mayor escándalo (Agro Ingreso Seguro)¹⁴⁶ por cuenta de las asignaciones de créditos no reembolsables a familias adineradas del país, familiares de funcionarios públicos e incluso a narcotraficantes. El comportamiento del PIB del sector agropecuario tiene un crecimiento promedio de 2% por debajo del total nacional; mientras el PIB total mostró entre 1993 y 2011 un crecimiento promedio de 3.51%, en ese mismo periodo el sector agropecuario tan solo creció 1.51%. Esta es la explicación del porqué el sector más importante de la economía colombiana no es un potencial contribuyente de la misma¹⁴⁷.

Grafica 6. Índice PIB total – PIB Agrícola



6.2.5 Incremento de la pobreza. La pobreza se origina desde el conflicto violento porque genera destrucción y animadversión; lo que se traduce en pérdida de capital humano y físico. De otro modo, la pobreza ocasiona conflicto debido al incremento en las probabilidades que tienen los individuos de involucrarse en actividades

¹⁴⁶ Programa del gobierno colombiano que buscó subsidios a agricultores colombianos, substituido luego del escándalo alrededor del programa, por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

¹⁴⁷ Bejarano, Jesús: Economía de la Agricultura. Bogotá, Colombia: Tercer mundo. 1998

ilícitas, además de discrepar con las instituciones y autoridades estatales encontrando en las armas una vía para manifestar su inconformidad.

En el cimiento de los conflictos armados, se observa una complicada agrupación de elementos como son: las sesgadas oportunidades de participación política, cultural y económica entre las distintas congregaciones de una misma sociedad; la ausencia de medidas que garantizan una participación democrática incluyente y la falta de capacidad en la búsqueda de una solución digna y oportuna que ponga fin al conflicto.

Pese a que el conflicto colombiano data desde mediados del siglo XX, fue solo en la década de los 90 que algunos economistas se dedicaron a estudiar el conflicto, introduciendo una rica y amplia gama de enfoques que tienen para analizar los diversos fenómenos sociales. Entre los más destacados están los trabajos de Mauricio Rubio Pardo, la Unidad de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación, Martha Badel y Edgar Trujillo y Clara Elena Parra.

En Crimen y Crecimiento en Colombia, publicado en marzo de 1995, Rubio encuentra que los costos de las actividades ilícitas de 1993, entre las que se destacan los delitos contra la vida, la integridad, la propiedad privada y terrorismo entre otros; fueron \$6 billones, lo que representa un poco más del 15% del PIB. El autor hace uso del enfoque de modelos de crecimiento para estimar el impacto de la violencia en el comportamiento anual del PIB. Finalmente, toma en cuenta la tasa de homicidios como parte del residuo de Solow y mediante estimación econométrica encuentra que el incremento de la tasa de criminalidad desde 1970 con 20% hasta superar el 80% en los años noventa.

Por su parte, la Unidad de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación publicó en 1995 un estudio sobre los costos económicos del conflicto colombiano para el periodo comprendido entre 1990 y 1994, basándose en los

impactos generados desde las actividades guerrilleras. Camilo Granada y Leonardo Rojas concluyeron que en promedio los impactos de las actividades bélicas provenientes de las guerrillas equivalen al 4% del PIB¹⁴⁸.

En 1998 Edgar Trujillo y Martha Badel, calculan los costos de la criminalidad urbana y el conflicto armado a través del enfoque contable, haciendo la diferenciación entre los costos directos e indirectos que acarrea el conflicto mismo. Agrupan en los costos directos la pérdida de capital físico, humano y de recursos naturales; y entre los indirectos ubican los efectos secundarios que genera la criminalidad. En esta investigación los autores presentan estimaciones sólo de los costos considerados directos por ellos¹⁴⁹.

El enfoque de Parra se basa en los modelos de crecimiento. Analiza el impacto de la criminalidad en el crecimiento económico mediante la contracción de la inversión, hallando que la inversión privada no residencial y la inversión privada residencial sufren un efecto inversamente proporcional a la tasa de homicidios¹⁵⁰. Dentro de este estudio sostiene que si se lograran disminuir los índices de criminalidad contra la vida en un 10% anual, el efecto causado sobre el crecimiento económico estaría representado en 1.24% del PIB anual.

El accionar violento del conflicto y la violencia disminuyeron el crecimiento económico colombiano en cerca de dos puntos porcentuales entre 1993 y 2005, un ejemplo en la disminución de la productividad se da en los noventa y está relacionado directamente a la violencia impuesta por los carteles del narcotráfico¹⁵¹, flagelo asociado con el conflicto armado desde los años ochenta. Las regiones

¹⁴⁸ Granada, Camilo., y Rojas, Leonardo: "Los costos económicos del conflicto armado en Colombia: 1990-1994". Archivos de Macroeconomía 1995.

¹⁴⁹ Trujillo, Edgar y Badel, Martha: "Los Costos Económicos de la Criminalidad y la Violencia en Colombia: 1991-1996". Archivos de Macroeconomía.

¹⁵⁰ Parra, Clara. (1998). Determinantes de la Inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia. Archivos de Macroeconomía (084).

¹⁵¹ Cárdenas, Mauricio: "Economic Growth in Colombia: a Reversal of Fortune?". Fedesarrollo. Documento de trabajo. No. 36 2007.

donde mayor impacto generó para el crecimiento del país son aquellas donde los combates, ataques y enfrentamientos, están a la orden del día¹⁵².

El sector económico más impactado por las acciones del conflicto es el agropecuario, toda vez que la mayor concentración de incursiones armadas, secuestros y atentados; se realizan en las zonas rurales, lo que dentro de una economía agrícola, representa un daño trascendental para la población que se sostiene de las actividades del agro, al tener de victimarios a todos los actores activos del conflicto.

El incremento constante de la pobreza en las zonas rurales, deja en evidencia que un posible acuerdo en La Habana traería grandes beneficios para todos, es por eso que la finalización de esta guerra no debería ser solamente un objetivo de la agenda del Ejecutivo, sino de la totalidad de los colombianos.

¹⁵² Querubín, Pablo: "Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia". Documentos cede. No. 2003-12. Bogotá: cede, Universidad de los Andes

7. CONCLUSIONES

El conflicto colombiano pasó de ser un acontecimiento rural y aislado a ser tema de estudio obligado de las ciencias sociales. La sociología, la ciencia política y la historia fueron las ramas pioneras en encargarse de estudiar más a fondo el tema del conflicto colombiano. Pero como la presencia de este accionar bélico compromete más que la estabilidad política y los derechos humanos; la ciencia económica se ha ocupado de este flagelo, con producción académica enfocada al análisis del impacto que desde la violencia generada por el conflicto, recae sobre el desarrollo económico y social del país.

La violencia, un flagelo que ha estado presente a lo largo de la historia de Colombia, desde su conformación como república hasta hoy, es el resultado de diversas causas arraigadas en los aspectos social, político y económico. La complejidad sobre el origen y causas del conflicto, imposibilita hallar una razón única que responda todos los interrogantes derivados acerca de su continuidad y expansión, pero deja claro que las fallas institucionales están presentes en cada uno de los aspectos desde donde se suscitó este largo enfrentamiento.

La forma como el conflicto impacta negativamente el crecimiento económico se da a través de tres canales que son: i) destrucción de capital humano y físico, ii) afecta las relaciones comerciales y iii) desincentiva la inversión a causa de la incertidumbre y de la estabilidad política. Además de esto, hay una considerable inversión en gastos de guerra, que bien podrían ser dirigidos a la mejora de los servicios básicos de la comunidad como son la educación, la salud y la vivienda.

Debido a la trayectoria del conflicto, el país ha venido invirtiendo el 3.5% del PIB (\$23 billones) anualmente sólo en seguridad; o sea el 14% del Presupuesto General de la Nación. De esta partida, el 6% se destina al financiamiento del combate con

los grupos ilegales. Esta cifra no contiene los daños que dejan los atentados a la infraestructura, acciones que en promedio tienen para el país un costo de \$60 mil millones.

Si bien la posible pacificación del conflicto liberaría esa parte del Presupuesto General de la Nación, en el corto plazo estos dividendos con los que se ha mantenido la guerra, tendrán que ser destinados para los costos que la paz va a generar. Esto no quiere decir que la paz tenga un valor monetario, lo que tiene un costo y bastante alto es el proceso para alcanzarla.

Entre 2000 y 2014, han sido destinados \$4.13 billones para resarcir económicamente a las víctimas del conflicto, los diálogos en La Habana han generado un costo cercano a los \$15 mil millones hasta 2013, mientras que la protección de más de 2 millones de menores entre desplazados y rescatados de las filas subversivas lleva sumados \$139.268 millones.

El fin del conflicto, sin duda encaminaría a la economía por la senda de un crecimiento sostenido, por tanto, hay que tener presente que para tal fin, se deben aplicar políticas públicas que combinen con las medidas económicas necesarias, ya que con políticas y medidas por separado no se obtendrían los resultados esperados.

El resultado del conflicto para los grupos que lo protagonizan, deja ver hasta ahora una confrontación de tres fuerzas diferentes de perdedores. A la guerrilla no le han alcanzado cincuenta y dos años de lucha para llegar al poder; los paramilitares y su política sanguinaria y devastadora no han podido combatir a la insurgencia, y el Estado, con todo y los matices de sus discursos que van desde el más pacificador hasta el más guerrillero, no ha logrado en medio siglo tener el control total del orden en el territorio nacional.

BIBLIOGRAFÍA

ABEL, C. Política, Iglesia y Partidos en Colombia. . Bogotá: FAES. Universidad Nacional . 1987.

ÁLVAREZ, S. Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. Revista Colombia Internacional. Universidad de los Andes.2008.

ARANGO, C. Terrorismo y seguro de terrorismo. Consideraciones de carácter jurídico, económico y social. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. 2005.

ARIAS, G. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis.. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. 2007.

BEJARANO, J. La política de paz durante el gobierno Barco. En M. y. DEAS, Política, economía y desarrollo social. El gobierno Barco 1986-1990 (págs. 79-98). Bogotá: Fedesarrollo. Fondo Cultural Cafetero.1994.

BEJARANO, J. Economía de la Agricultura. Bogotá.: Tercer mundo. .

CÁRDENAS, M. (2007). Economic Growth in Colombia: a Reversal of Fortune? . Bogotá: Fedesarrollo.1988.

CÁRDENAS, M., & CADENA. Análisis del Incremento en el Gasto en Defensa y Seguridad: Resultados y Sostenibilidad de la Estrategia. . Bogotá: Fedesarrollo. 2005.

CARRILLO, V. Colombia: Terrorismo de Estado. Bogotá: Icaria. Centro Nacional de Memoria Histórica: "Una verdad secuestrada": cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. . Bogotá: Imprenta Nacional. 2006.

CHERNICK, M. W. Acuerdo Posible: Solución Negociada al Conflicto Armado Colombiano. Bogotá: Ediciones Aurora. 2008.

CORREDOR, C. Reformas Institucionales en Colombia. Revista Economía Institucional Universidad Externado de Colombia. 2001.

DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá. 2013.

DÍAZ, A. y. Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano. Bogotá: Norma. 2008.

Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación. (19 de julio de 2016). Obtenido de www.dnp.gov.co/portalweb/

DUNCAN, G. Exclusión, insurrección y crimen. La Habana, Cuba: CHCV.

ECHANDÍA, C. (1999). Expansión territorial de la guerrilla colombiana. Bogotá: Norma. 2015.

ECHANDÍA, C. El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos. Revista Colombia Internacional.

ECHEVERRY, J. C. Por qué la justicia no responde al crimen: el caso de la cocaína en Colombia. "Corrupción, Crimen y Justicia. Una Perspectiva Económica. Bogotá: Tercer Mundo, Fedesarrollo y Lacea. 2000.

ECHEVERRY, J. C., & SALAZAR, N. y. (2001). Nos Parecemos al Resto del Mundo. Archivos de Macroeconomía Documento 143 . Bogotá. 2001.

ECHEVERRY, J., & SALAZAR, N. El conflicto colombiano en el contexto internacional. Bogotá: Martínez, Astrid Editora. 2001.

ESTRADA, J. Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. . La Habana, Cuba: CHCV. 2015.

FAJARDO, D. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. La Habana, Cuba: CHCV. 2015.

FERRY, S. Violentología. Bogotá: Icono. 2012.

FIP. Soborno y Extorsión: Obstáculos para la Construcción de Paz y la Superación del Conflicto en Colombia. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, . 2012.

GIHA, Y., & RIVEROS, H. El Gasto Militar en Colombia: aspectos macroeconómicos y microeconómicos. Revista de la Cepal No. 63. 1999.

GIRALDO, J. Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. La Habana, Cuba: CHCV. 2015

GIRALDO, J. Política y guerra sin compasión. La Habana, Cuba: CHCV.

GONZÁLEZ, F., & BOLÍVAR, I. J. De la Nación Fragmentada a la Construcción del Estado . Bogotá: CINEP. 2015

GRANADA, C. Los costos del conflicto armado 1990-1994. . Revista Planeación y Desarrollo vol XXVI No. 4. 1995.

GUTIÉRREZ, F. ¿Una historia simple? . La Habana, Cuba: CHCV. 2015.

GUTIÉRREZ, F. Nuestra guerra sin nombre. Bogotá: Norma. 2006.

HOLMES, J., & GUTIÉRREZ DE PIÑERES, S. Drugs, Violence, and Development in Colombia: A Department-Level Analysis. . Latin American Politics & Society .2006

IBAÑEZ, A. M., & MOYA, A. Hacia una política proactiva para la población desplazada. . Bogotá: Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia, Uniandes. 2006

Informe del Centro de Seguridad y Democracia. Bogotá.2014

Informe del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DHI. Bogotá. 2006

Informe INVIAS. Bogotá.2004

Jácome Suescún, A. Una tragedia contada en números. Revista e+ No. 8 Ecopetrol. 2015.

KALMANOVITZ, S. (s.f.). El impacto económico del conflicto interno colombiano y un escenario de paz. Bogotá: Universidad de los Andes.

LEAL B, F. Políticas de Seguridad: de Improvisación en Improvisación. En la Encrucijada Colombia Siglo XXI. . Bogotá: Norma.2006.

LEAL, F. La Inseguridad de la Seguridad, Colombia 1958-2005. . Bogotá: Ed Planeta .2006.

LEGRAND, C. The Colombian crisis in historical perspective. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies.2003.

LÓPEZ, C. Los costos ocultos de la paz en Colombia. Ensayos sobre paz y desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional. Bogotá: Banco Mundial.2006

LÓPEZ, C. Balance político de la parapolítica. . Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.2008.

MARTÍNEZ, A. Economía, Crímen y Conflicto. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional.2001.

MARTÍNEZ, H. La economía subterránea e ilegal en Colombia. Elementos para el estado del arte sobre conflicto y economía. . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.2010.

MINDEFENSA. Gasto en Defensa y Seguridad, 1998-2011. Ministerio de Defensa Nacional. 2009.

MOLANO, A. Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). . La Habana, Cuba: CHCV. 2015.

MOLLER, L. C. Portafolio. 2012.

MONTENEGRO, A., & POSADA, C. Violencia, Criminalidad y Justicia: Otra Mirada Desde la Economía. . Bogotá: Coyuntura Económica Fedesarrollo.2000

OCDE. Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2015.

OLA política. Consultado el 22 de Julio de 2016. Disponible en: Obtenido de <http://www.olapolitica.com/content/costo-del-proceso-de-paz>

OLA política. consultado el 21 de Julio de 2016. Disponible en: <http://www.olapolitica.com/content/costo-del-proceso-de-paz>

OTERO, D. Las Cifras del Conflicto Colombiano. . Bogotá: Indepaz. 2007

PARRA, C. Determinantes de la inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia. . Revista Planeación y Desarrollo, Volumen 84. 1998.

PÉCAUT, D. Acerca de La Violencia de los años cincuenta, Boletín Socioeconómico No 17 . Cidse Univalle.1987

PÉCAUT, D. Orden y Violencia. Evolución Socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Bogotá: Norma.2001

PÉCAUT, D. Violencia y Política en Colombia. Elementos de reflexión. Medellín: Hombre Nuevo.2003.

PÉCAUT, D. Las FARC, ¿Una guerrilla sin fin o con fines? ". Bogotá: Norma.

PÉCAUT, D. (2015). Un conflicto armado al servicio del statu quo social y político. La Habana, Cuba: CHCV. 2008.

PETRAS, J. Uribe y su record mundial. Voltairenet.org.2010.

PINILLA, F. Impacto del Conflicto Armado Colombiano en la Producción Agrícola Nacional. . Bogotá: Universidad de los Andes. 2013.

PINTO, M., ALTAMAR, I., & LAHUERTA, Y. El secuestro en Colombia: caracterización y costos económicos. Archivos de Economía, Documento 257, . Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.2004.

PIZARRO LEONGÓMEZ, E. Una democracia asediada. Bogotá: Norma. 2004.

QUERUBÍN, P. Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia. . Bogotá: Universidad de los Andes.2013.

RANGEL, A. "Transparencia en el presupuesto en defensa. El caso colombiano. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia .2005

RESTREPO BOTERO, J. Descentralización y violencia en Colombia. Bogotá: Martínez, A.2001.

RESTREPO, J. (2003). Análisis Económico de Conflictos Internos. Bogotá: Fundación ideas para la paz.2003.

RESTREPO, J. A. Guerra y Violencias en Colombia: Herramientas e Interpretaciones. . Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.2009.

RETTBERG, A. Los costos del conflicto armado colombiano para el sector privado: Resultados de una encuesta nacional. Bogotá: ConPaz/ International Alert. 2006

RICHANI, N. Conflictos intrincados. Economías políticas de los sistemas de guerra en Líbano y Colombia. Bogotá: Universidad Nacional Alfaomega y Iepri.

RODRÍGUEZ BAUTISTA, N. Ejército de Liberación Nacional Una Historia. 2003.

ROJAS ARAVENA, F. Prevención de conflicto y paz en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Rojas y Goucha Editores.2001.

RUBIO, M. El desbordamiento de la violencia en Colombia. . En A. G. Londoño, Asalto al desarrollo: violencia en América Latina. Washington: Londoño, A. Gaviria y R. Guerrero Editores.2000.

RUBIO, M. Conflicto y Finanzas Públicas Municipales en Colombia. CEDE 2002-17. . Bogotá: Universidad de los Andes. 2002.

SÁNCHEZ, F. Las Cuentas de la Violencia: Ensayos Económicos Sobre el Conflicto y el Crimen en Colombia . Bogotá: Norma.2007.

SÁNCHEZ, F. .Conflicto, Estado y Descentralización: del Progreso Social a la Disputa Armada por el Control Local, 1974-2002. IEPRI. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del Conflicto en Colombia. Bogotá: Norma.2006.

SRIRAM, C. Confronting Past Human Rights Violations: Justice vs. Peace in Times of Transition. Nueva York: Frank Cass.2004.

TORRIJOS, V. Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano. La Habana, Cuba: CHCV. 2015

TRUJILLO, E. Los Costos Económicos de la Criminalidad y la Violencia en Colombia: 1991-1996. . Bogotá: DNP.1988

VARGAS VELÁSQUEZ, A. Una mirada académica a los conflictos colombianos, Ministerio de Justicia, PNR, Bogotá, 1994. Bogotá: Ministerio de Justicia PNR.1994.

VARGAS, J. Conflicto interno y crecimiento económico en Colombia. . Bogotá: Universidad de los Andes.2003.

VEGA CANTOR, R. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado. Bogotá: Espacio Crítico. 2015.

VÉLEZ, M. A. FARC-ELN. Evolución y expansión territorial. . Bogotá: Documento CEDE.2002.

Verdad Abierta. Consultado el 16 de julio de 2016. Disponible en <http://www.verdadabierta.com/>

VILLAMIZAR, A. El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: De la contención a la ofensiva. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.2005